



REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

6ª REUNIÓN — 5ª SESIÓN ORDINARIA — 16 DE MARZO DE 1995

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDUARDO MENEM,

del señor vicepresidente del Honorable Senado,
don ORALDO N. BRITOS,

del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor RICARDO E. LAFFERRIÈRE,

y del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,
doctor JOSÉ A. ROMERO FERIS

Secretarios: doctor EDGARDO RENÉ PIUZZI y señor EDGARDO P.V. MURGUÍA

Prosecretarios: señor JUAN JOSÉ CANALS y doctor DONALDO ANTONIO DIB

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
BITTEL, Deolindo F.
BORDON, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
COSTANZO, Remo J.
DE LA RÚA, Fernando
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARANGUELLO, Pedro C.
MARTÍNEZ, Daniel E.
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MIRANDA, Julio
MOLINA, Pedro E.
PEÑA de LÓPEZ, Ana M.

RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO, Juan C.
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SAN MILLÁN, Julio A.
SAPAG, Felipe R.
STORANI, Conrado H.
VACA, Eduardo P.
VERNA, Carlos A.

AUSENTES, CON AVISO:

AVELÍN, Alfredo
BRAVO, Leopoldo
CENDOYA, Jorge J.
HUMADA, Julio C.
JUÁREZ, Carlos A.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
OYARZÚN, Juan C.
SÁNCHEZ, Libardo N.
SNOPEK, Guillermo E.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
VILLARROEL, Pedro G.

POR ENFERMEDAD:

OTERO, Edison

SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente provisional del Honorable Senado, el señor senador por el Chubut, don César Mac Karthy procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 880.)
2. A moción del señor senador Molina se considera sobre tablas y se aprueba un proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico y se incrementa la alícuota del IVA. (CD.- 3 y 4/95). (Pág. 880.)
3. Apéndice:
Sanción del Honorable Senado. (Pág. 908.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 20 del jueves 16 de marzo de 1995:

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito al señor senador por el Chubut don César Mac Karthy a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y al público a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Mac Karthy procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2

MODIFICACION DE LOS IMPUESTOS SOBRE BIENES PERSONALES Y AL VALOR AGREGADO

Sr. Presidente (Menem). — Informo a los señores senadores que el expediente que está a consideración como tema entrado es el contenido en el C.D.-3/95: proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley 23.966 en lo concerniente al impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico y se incrementa la alícuota del IVA.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Buenos Aires, 15 de marzo de 1995.

Señor presidente del Honorable Senado:

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado

en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º — Modifícase el título VI de la ley 23.966, de impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico, de la siguiente forma:

1. Sustitúyese en todo su texto, la expresión "bienes personales no afectados al proceso económico" por la expresión "bienes personales".

2. Sustitúyese el artículo 21, por el siguiente:

Artículo 21: Estarán exentos del impuesto:

- a) Los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, así como su personal administrativo y técnico y familiares, en la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios internacionales aplicables. En su defecto, la exención será procedente, en la misma medida y limitaciones, sólo a condición de reciprocidad;
- b) Las cuentas de capitalización individual comprendidas en el régimen de capitalización previsto en el título III de la ley 24.241;
- c) Las cuotas sociales de las cooperativas;
- d) Los bienes inmateriales (llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros bienes similares).

3. Incorpórase a continuación del artículo 21, el siguiente:

Artículo...: Las exenciones dispuestas por leyes generales o especiales, referidas a títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias o las municipalidades y a las obligaciones negociables previstas en la ley 23.576, no serán aplicables respecto del presente impuesto, cuando su adquisición o incorporación al patrimonio se verifique con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley por la que se incorpora este artículo.

4. Sustitúyense el antepenúltimo y el penúltimo párrafo del inciso a) del artículo 22, por lo siguiente:

En el caso de inmuebles rurales, del valor determinado de acuerdo con los apartados anteriores se reducirá el importe que resulte de aplicar un 25 por ciento del valor asignado a la tierra fiscal libre de mejoras a los fines del pago del impuesto inmobiliario. Al valor del inmueble, en el caso de zonas áridas con perforaciones de agua bajo riego, se descontará el valor de estas perforaciones. Se entenderá que los inmuebles revisten el carácter de rurales cuando así lo dispongan las leyes catastrales locales. No será considerado como mejora, el riesgo público que beneficie un determinado predio. El valor a computar para los inmuebles de acuerdo con las disposiciones de este inciso no podrá ser inferior al de la base imponible vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquide el presente gravamen, fijado a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares. Este valor se tomará asimismo en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el valor a la fecha

de ingreso al patrimonio. Si se trata de inmuebles rurales, el importe aludido se reducirá conforme a lo previsto en el párrafo anterior. De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas del valor determinado de conformidad a las disposiciones de este inciso podrá deducirse el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en conceptos de créditos que hubiesen sido otorgados para la compra o construcción de dichos inmuebles o para la realización de mejoras en los mismos.

5. Sustitúyese el último párrafo del inciso *b)* del artículo 22, por el siguiente:

En el caso de automotores, el valor a consignar no podrá ser inferior al que establezca la Dirección General Impositiva, al 31 de diciembre de cada año, con el asesoramiento de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

6. Incorpórase al artículo 22, los siguientes incisos:

h) Los títulos públicos, acciones de sociedades anónimas y en comandita, y demás títulos valores —incluidos los emitidos en moneda extranjera— que se coticen en bolsas o mercados; al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año o último valor de mercado de dicha fecha en el supuesto de cuotas partes de fondos comunes de inversión.

Los que no coticen en bolsa se valorarán por su costo, incrementado, de corresponder, en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se hubieran devengado a la fecha indicada, excepto en el caso de acciones que no coticen en bolsa, para las que se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Cuando se trate de acciones que no coticen en bolsa, se computarán al valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida. La reglamentación fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de capital que se hubieran producido entre la fecha de cierre de la sociedad emisora y el 31 de diciembre del año respectivo.

Cuando se trate de cuotas sociales de cooperativas a su valor nominal de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la ley 20.337;

i) Participaciones en el capital (activo-pasivo) de cualquier tipo de sociedades —excluidas las acciones a que se refiere el inciso anterior— y titularidad del capital de empresas o explotaciones unipersonales: por el importe que se establezca para la participación o titularidad de acuerdo con el capital de la sociedad, empresa o explotación que surja del último balance cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida. Al valor de la participación que así resultare, se sumará o restará, respectivamente, el saldo acreedor o deudor de la cuenta particular al 31 de diciembre del año por el que se efectúa la liquidación del gravamen, sin considerar los créditos prove-

nientes de la acreditación de utilidades que hubieran sido tenidas en cuenta para determinar la participación a la fecha de cierre del ejercicio considerado.

Cuando no se lleven registraciones que permitan confeccionar balance en forma comercial, el valor de la participación o titularidad se determinará valuando el capital conforme a las normas que al respecto establezca la reglamentación, que asimismo fijará la forma de computar los aumentos y/o disminuciones de capital que se hubieran producido entre la fecha de cierre de la sociedad, empresa o explotación originaria de la participación y el 31 de diciembre de cada año.

En los casos en que de acuerdo con lo previsto deban computarse los saldos deudores o acreedores de las cuentas particulares de los socios, con el fin de determinar las respectivas participaciones en los patrimonios sociales, no deberán considerarse aquellos saldos provenientes de operaciones efectuadas con las sociedades en condiciones similares a las que pudiesen pactarse entre partes independientes. Estos últimos saldos serán considerados como créditos o deudas, según corresponda;

j) Los bienes de uso no comprendidos en los incisos *a)* y *b)* afectados a actividades gravadas en el impuesto a las ganancias por sujetos, personas físicas que no sean empresas: por su valor de origen actualizado menos las amortizaciones admitidas en el mencionado impuesto.

7. Sustitúyese la alícuota establecida en el primer párrafo del artículo 25 y en el primer párrafo del artículo 26, fijándose en ambos casos en cincuenta centésimos por ciento (0,50%).

8. Incorpóranse entre el primero y el segundo párrafo del artículo 26, los siguientes:

Cuando se trate de inmuebles ubicados en el país, inexplorados o destinados a locación, recreo o veraneo, cuya titularidad directa corresponda a sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones domiciliados o, en su caso, radicados o ubicados en el exterior, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que los mismos pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o, en su caso, radicadas en el país, sin perjuicio de lo cual deberá aplicarse en estos casos el régimen de ingreso del impuesto previsto en el párrafo anterior.

Lo dispuesto en el primer párrafo no será de aplicación para los bienes que se detallan a continuación:

- a)* Los títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias o municipalidades;
- b)* Las obligaciones negociables previstas en la ley 23.576;
- c)* Las acciones y participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedad, incluidas las empresas y explotaciones unipersonales;

d) Las cuotas partes de fondos comunes de inversión;

e) Las cuotas sociales de cooperativas.

Cuando la titularidad directa de los bienes indicados en el párrafo anterior corresponda a sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones domiciliados o, en su caso, radicados o ubicados en el exterior, en países que no apliquen regímenes de nominatividad de los títulos valores privados, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que los mismos pertenecen a personas físicas o sucesiones indivisas domiciliadas o, en su caso, radicadas en el país, sin perjuicio de lo cual deberá aplicarse en estos casos el régimen de ingreso del impuesto previsto en el primer párrafo de este artículo.

La presunción establecida en el párrafo anterior no será de aplicación cuando los titulares directos a que se refiere el mismo sean compañías de seguro, fondos abiertos de inversión, fondos de pensión o entidades bancarias o financieras cuyas casas matrices estén constituidas o radicadas en países en los que sus bancos centrales u organismos equivalentes hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité de Bancos de Basilea.

9. Incorpórase como último párrafo del artículo 26 el siguiente:

La reglamentación establecerá los mecanismos mediante los cuales se evitará la doble imposición en el país en los casos en que sociedades del exterior sean titulares de bienes comprendidos en este artículo, siendo sus accionistas residentes en el país u otros supuestos de doble imposición que pudieran presentarse.

Art. 2º — Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación y surtirán efecto para los bienes existentes a partir del 31 de diciembre de 1995, inclusive.

Art. 3º — Créase un fondo especial para el equilibrio fiscal, que será constituido por un adicional con asignación específica de tres puntos sobre la alícuota del impuesto al valor agregado, que regirá por el término de un año. Dicho fondo será administrado por el Tesoro nacional y se destinará al sostenimiento del equilibrio fiscal y el fortalecimiento del crédito público.

Art. 4º — La Nación se obliga a efectuar un aporte no reintegrable por un valor de 1.200.000 pesos en los próximos 18 meses para contribuir a financiar la reforma de los estados provinciales, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la banca provincial y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Al cumplirse sus objetivos dichos recursos se distribuirán entre las provincias en la proporción que le corresponde en el régimen de coparticipación federal.

Art. 5º — Prorrógase hasta el 1º de abril de 1996 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento relacionadas exclusivamente a materia tributaria y cuyo vencimiento hubiera operado u operase con anterioridad a dicha fecha, que estuvieren pendientes de implementación.

Art. 6º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

ALBERTO R. PIERRI.

*Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.*

Sr. Molina. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

Sr. Molina. — Señor presidente: solicito que este proyecto de ley en revisión sea tratado sobre tablas. Las razones que motivan este pedido van a ser expuestas por el miembro informante de nuestra bancada, el señor senador por Salta.

De todos modos, no puedo menos que expresar como presidente del bloque justicialista mi profunda satisfacción por el afecto que se ha mostrado en la unidad de concepción para trabajar ayer —hecho que nos ha permitido sancionar leyes—, a pesar del dolor que sentíamos. Pero lo hicimos con la convicción de que estábamos pensando en el país, en la Argentina grande. Creo que nos acompañaba todo el pueblo en ese momento tan triste que vivimos los justicialistas.

Como dije anteriormente, el señor senador por Salta esgrimirá los argumentos por los que solicitamos el tratamiento sobre tablas de esta iniciativa. Igualmente, diría que dichos fundamentos son conocidos; por eso pido que votemos la moción de tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por Santa Cruz.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente, señores senadores: luego de las expresiones del señor presidente de nuestra bancada, voy a referirme a la sanción de la Cámara de Diputados por la que se introducen modificaciones a la ley 23.966 en lo que se refiere al impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico. Además, esta iniciativa crea un fondo de asignación específica para sostener el equilibrio fiscal.

El artículo 1º propone la modificación del título VI de la ley que mencioné hace unos instantes. Por lo tanto, a partir de la sanción definitiva de este proyecto, ese título VI se va a

denominar "impuesto sobre los bienes personales", eliminándose la frase "no incorporados al proceso económico".

La intención de esta iniciativa es ampliar la base de imposición para la incorporación de bienes que antes estaban exentos porque estaban gravados por el impuesto a los activos.

El objetivo básico de esta primera parte del proyecto de ley es obtener un incremento en la recaudación para sostener el equilibrio y el superávit fiscal de unos 700 millones de pesos.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Oraldo N. Britos.

Sr. Romero. — En el punto 2 del artículo 1° se deja establecido que las exenciones a la aplicación de este tributo han sido reducidas a prácticamente tres. Una es la que corresponde a los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, así como a su personal administrativo y técnico y familiares, de acuerdo con los convenios internacionales. En su defecto será aplicable sólo a condición de reciprocidad.

Otra exención se refiere a las cuotas sociales de las cooperativas. Y una tercera a los bienes inmateriales: llaves, marcas, patentes, derechos de concesión u otros activos similares.

Se incorpora, también, una nueva exención; a saber, las cuentas de capitalización individual incorporadas en el régimen de capitalización previsto en el título III de la ley 24.241, que establece el sistema jubilatorio basado en los aportes al nuevo sistema de capitalización. Por consiguiente, al ser éstas las únicas exenciones, el resto de las que estaban quedan obviamente gravadas.

Voy a nombrar algunos ejemplos, para conocimiento de todos: los depósitos a plazo fijo, los títulos públicos, los depósitos en caja de ahorro, en cuentas especiales —ya sea en moneda local o extranjera—, las obligaciones negociables, las acciones y participaciones de capital en empresas y explotaciones unipersonales, las cuotas partes de los fondos comunes de inversión y los inmuebles rurales.

Por el punto tercero, a continuación del artículo 21 se agrega el siguiente: "Las exenciones dispuestas por leyes generales o especiales, referidas a títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias o municipalidades y a las obligaciones negociables previstas en la ley 23.576, no serán aplicables respecto del presente impuesto, cuando su

adquisición o incorporación al patrimonio se verifique con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley por la que se incorpora este artículo".

O sea que aquellos títulos o bienes que han recibido exenciones por otra ley hasta este momento van a seguir exentos; pero toda incorporación a partir de ahora va a estar bajo la imposición de esta norma.

Después hay un mecanismo de evaluación de los inmuebles rurales por el cual se contemplan algunas exenciones. Una de ellas es que se le va a hacer una quita al valor fiscal de un 25 por ciento. Es decir que se va a calcular sobre el 75 por ciento el valor fiscal del bien.

En los inmuebles ubicados en zonas áridas con perforaciones de agua para riego, también se tomará en cuenta el valor de esas perforaciones, y se establece un mínimo en el cual las mejoras, como en el caso del riego, quedan a un lado para la deducción.

En el texto se han corregido errores tipográficos que en la versión que obra en Secretaría ya han sido subsanados.

Con respecto a la valuación de los inmuebles destinados a casa-habitación se establece una deducción en el caso de la sucesión indivisa y también en el de aquellas que tengan pasivos u obligaciones que hayan surgido de la compra, de las mejoras o de la construcción de dichos inmuebles. O sea, vendría a ser el activo neto que tuviera alguien en un inmueble si deducimos los pasivos por la compra, remodelación o construcción de ese mismo inmueble.

En el caso de los automóviles se fija como piso de la valuación el que establezca la Dirección General Impositiva con el asesoramiento de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que antes realizaba la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

En cuanto a los títulos públicos, que son los activos que ahora se incorporan por el artículo 22 se fijan los mecanismos de cómo se van a valorar. Así, los títulos públicos, acciones de sociedades anónimas y en comandita y demás se valorarán según su cotización. En caso de que no se coticen, esta valuación se hará por el mecanismo de valor de libros de esos títulos o valores.

En el caso de los bienes de uso no comprendidos en los incisos a) y b), o sea los que no son inmuebles o automóviles y demás afectados a actividades gravadas en el impuesto a las ganancias de personas físicas, se establece un mecanismo de valuación distinto al anterior.

Lo más importante es que al ampliarse la base disminuye la presión, ya que el 1 por ciento

queda reducido al 0,50 por ciento, o sea la mitad. El criterio es que al eliminarse las exenciones y bajar la alícuota, hay una mayor equidad en el tributo.

Después hay algunas disposiciones sobre tenencia de bienes por titulares que se supone no son residentes en el país o que tienen su domicilio en el exterior. A los mismos se los considera como residentes, salvo a los extranjeros que son tenedores de acciones o de títulos del Estado nacional o provincial. Es decir que los títulos valores, acciones o participaciones cuyos poseedores sean extranjeros no están gravados, pero sí en el caso de inmuebles. Recíprocamente, aquellos que tengan inmuebles en el exterior están obligados a cumplir con sus obligaciones.

Por otra parte, en el artículo 26 se incorpora un párrafo por el cual se faculta al Poder Ejecutivo a establecer los mecanismos que eviten casos de doble imposición, como ocurre con las sociedades del exterior que sean titulares de bienes en el país siendo sus accionistas residentes en el país, o cualquier otra situación de doble imposición.

Además, se incorpora en el mismo texto del pro, como una segunda parte —aunque no esté así especificado— un tema que se ha venido debatiendo en estos últimos días, y sobre el cual hemos tenido oportunidad de opinar. Se refiere a la creación de un fondo especial, que tiene básicamente dos fines, los cuales están expresados en el artículo 3º del proyecto de ley en revisión. Se trata del sostenimiento del equilibrio fiscal y el fortalecimiento del crédito público.

Consideramos que estamos atravesando por un momento en el cual la situación financiera nacional e internacional hace necesario que se recurra a este mecanismo de incrementar en tres puntos la alícuota del Impuesto al Valor Agregado, pero por un período determinado. En efecto, se establece el plazo de un año, que está previsto en el mismo artículo 3º. Se trata de un adicional con asignación específica. Reitero que el Tesoro nacional administrará este fondo para cumplir los dos objetivos que he mencionado anteriormente: sostenimiento del equilibrio fiscal y fortalecimiento del crédito público.

Por el artículo 4º se establece que la Nación se obliga a efectuar un aporte no reintegrable por un valor de 1.200 millones de pesos en los próximos dieciocho meses para contribuir a financiar la reforma de los Estados provinciales. También se han incorporado como beneficiarios de este aporte la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la banca provincial y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Este aporte que la Nación va a efectuar está vinculado con el fondo fiduciario que hemos autorizado.

En la sesión anterior hemos aprobado la incorporación de las acciones que el Estado nacional posea o posea en la empresa YPF.

Para este fondo fiduciario que habíamos establecido, que caducaba o cesaba cuando se cumplieran los objetivos que el Estado le encomendaba y que contaba con un plazo de dos años, también se aplica un criterio similar. Es decir, una vez cumplidos esos objetivos, dichos recursos se distribuirán entre las provincias según la proporción correspondiente a cada una por el régimen de coparticipación federal.

Entonces, este fondo va a contribuir, junto con los otros fondos que el Estado nacional está disponiendo, al apoyo y asistencia de las reformas estructurales que aún muchas provincias no han podido concluir por falta de financiamiento. Con estos recursos se está armando la masa crítica necesaria para la reforma estructural de las provincias, de los Estados provinciales, y la reforma de las bancas tanto provinciales como municipales.

Por último, en el artículo 5º se prorroga hasta el 1º de abril de 1996 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento relacionadas exclusivamente a materia tributaria —el mismo pacto fiscal establecía mecanismos de cumplimiento anticipado a esa fecha—, obviamente, para aquellos casos en que las provincias no hubieran cumplido. Es decir que a aquellas que no hayan podido cumplir con el pacto fiscal por este proyecto se les otorga una prórroga hasta el 1º de abril de 1996. De este modo se establece una sincronía entre la obtención de los recursos y la posibilidad de que esos recursos sean aplicados en las mencionadas reformas provinciales. De esa manera, las provincias podrán cumplir con las obligaciones provenientes del pacto fiscal, ya que muchas no han sido cumplidas.

Esta, señor presidente, es una síntesis respecto de la sanción de la Cámara de Diputados que, llegado el caso, podríamos ampliar durante el tratamiento en particular.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: una vez más el Senado debe tratar, de forma apresurada un tema de suma trascendencia para el país. Un proyecto impositivo que fue aprobado esta madrugada en la Cámara de Diputados de la Na-

ción, debe ser tratado siete u ocho horas después por la Cámara de Senadores. Y no se trata de un proyecto menor. No es una iniciativa para construir un puente ni un subsidio para una escuela. Se trata de una ley —en caso de ser aprobada por este Senado y promulgada por el Poder Ejecutivo— que cambia sustancialmente nuestro sistema impositivo, señor presidente.

Adelanto que el bloque radical no elude el debate. Estamos aquí para exponer nuestras ideas con pasión pero con absoluta autenticidad. Voy a procurar hacer una exposición desprovista de toda consideración política que pueda pensarse de carácter electoralista en función de que estamos a pocos días de una elección nacional de la que surgirá un nuevo presidente de la Nación, nuevos gobernadores, concejales y legisladores. Pero debo señalar, desde ya, a los señores senadores y al señor presidente que este proyecto, una vez convertido en ley, va a profundizar el carácter regresivo del actual régimen fiscal de la Argentina.

En segundo lugar, avasalla como pocas veces hemos visto en una ley de estas características, el federalismo argentino, al quitar a las provincias el derecho a coparticipar de los impuestos, que según la Constitución deben ser distribuidos de acuerdo con un coeficiente que determina una ley del Congreso de la Nación.

En tercer lugar —y esto es lo más grave—, por esta iniciativa se condiciona a los Estados provinciales, para recibir parte de un fondo de 1.200 millones de pesos que se crea por el artículo 4º, a aceptar las reglas de ajuste del Estado, de reformas de sus administraciones y de privatización de la banca oficial, esto es, según los designios del Poder Ejecutivo; concretamente, del Ministerio de Economía. Entonces, cumplidos esos deberes por parte de las provincias, según lo establece textualmente el artículo que mencioné recientemente, ellas podrán percibir lo que por derecho les corresponde.

Por otra parte, este proyecto se refiere a los bienes personales. Hasta hoy tienen vigencia los impuestos que no afectan a la producción, denominados "impuestos al patrimonio" o, por otros, "impuestos a la riqueza", que tenían una muy exigua recaudación. Nosotros ya habíamos señalado esta anomalía.

Deben saber los señores senadores que en 1994 la recaudación impositiva en el país fue de alrededor de 18.000 millones de pesos en concepto de IVA, 6.000 millones de pesos por impuesto a las ganancias, denominado impuesto a

las rentas, y sólo 175 millones de pesos en concepto de este impuesto a los bienes personales.

Esto significa, señor presidente, una verdadera deformación, porque el IVA es un impuesto al consumo que se paga en cada compra que se realiza. Por ejemplo, cuando una persona compra un kilogramo de pan, un litro de leche, una ficha de subte. Este es el impuesto que más castiga a quienes menos tienen. Si bien es cierto que se paga IVA cuando se realizan grandes compras, como por ejemplo la compra de un yate o un automóvil Mercedes Benz, el impacto es mucho mayor entre quienes menos tienen, aquellos que tienen salarios muy bajos, los subocupados, los desocupados, ya que van a tener que pagar este 21 por ciento cuando compran algún elemento para su subsistencia.

Por eso digo que este impuesto es regresivo, que antes era del 18 por ciento y ahora se pretende elevarlo al 21 por ciento.

Recién me refería a los bienes personales que, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, no van a ser más bienes personales no afectados a la producción sino que se va a incluir a todos los bienes personales. En una palabra, se va a bajar la alícuota de este impuesto a la mitad y se va a ampliar la base de contribuyentes. Entonces, de esta manera, se va a beneficiar a quienes más tienen. El que tiene un campo de cinco mil hectáreas en Pergamino va a pagar la mitad de este impuesto porque la alícuota se reducirá en un 50 por ciento. Se va a ampliar la base imponible porque prácticamente todos los pequeños y medianos productores argentinos van a ser contribuyentes de este nuevo impuesto, dado que se van a computar, a los efectos del mínimo no imponible, sus propiedades rurales, sus casas, sus autos, sus tractores, sus máquinas agrícolas. De esta manera, ¿quién no va a superar el mínimo de 100 mil pesos?

Reitero, para que quede clara la figura, que este proyecto, de sancionarse, incrementa y profundiza el sentido regresivo del sistema fiscal. Se van a beneficiar los grandes propietarios y se van a perjudicar los miles de pequeños y medianos productores, quienes a partir de ahora van a tener que pagar este impuesto. Hubiese sido preferible que se aumentara la alícuota del impuesto. Ahora el productor agropecuario, señor presidente y Honorable Senado, va a estar sometido a una triple imposición. Además de tener que pagar a la comuna, a su municipio, el impuesto vial, y además de tener que pagar el impuesto inmobiliario en la provincia, va a tener que pagar, por ser el productor

rural, el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza o, como se lo denominaría en esta ley, a los bienes personales.

En cuanto al IVA, señor presidente, estamos absolutamente en contra del modo en que se ha concebido el incremento de la alícuota en tres puntos. En primer lugar, porque todo lo recaudado en concepto de este incremento va a ser administrado discrecionalmente por el Tesoro de la Nación. Se elimina completamente, como dije inicialmente, de la correspondiente coparticipación a las provincias argentinas, que están sometidas a ajuste tras ajuste desde hace muchos años. Y a la hora de cobrar estos recursos que les permitirían salir del estado de ahogo y de asfixia en que se encuentran, se enfrentan con este proyecto de ley, que es una absurda e inconstitucional prescripción.

Lo más grave de este breve proyecto de ley, señor presidente, es el artículo 4º, porque sostiene que se va a crear un fondo de 1.200 millones de pesos que la Nación va a distribuir de acuerdo con el mismo coeficiente de la coparticipación federal a las provincias, o sea que lo que se les quita en el artículo anterior les es dado en este artículo siempre y cuando cumplan con el objetivo de reformular el Estado y privatizar la banca oficial. En una palabra, se les quita la coparticipación, por un lado, y en el otro artículo se les dice que les será dada si cumplen con los deberes. ¿Pero qué deberes, señor presidente? ¿Puede existir una cláusula abierta de estas características? ¿Puede existir una norma tan vasta, tan lata, que posibilite, por ejemplo, que el señor ministro de Economía disponga que tenemos que transferir la caja de jubilaciones a la Nación? Esto ocurriría mientras en Mendoza existen sondeos o encuestas de opinión que muestran que los mendocinos quieren quedarse con las cajas? ¿O acaso tenemos que privatizar los bancos? ¿U obligar a Córdoba a privatizar EPEC, que ha demostrado que es una empresa que tiene superávit, que da ganancias, que está bien administrada y que el gobierno de la provincia, su legislatura y los cordobeses quieren que siga siendo de Córdoba? De esta manera, si el gobierno de Córdoba no cumple con los objetivos de reforma del Estado, no se le entregarán los 75 millones de pesos que les corresponderían por imperio de este artículo.

Esto no es otra cosa que obligar a las provincias a ponerse de rodillas ante los designios del poder central. Bajo ningún aspecto el bloque de la Unión Cívica Radical va a aprobar este proyecto, porque este artículo ofende al federalismo

que hemos abrazado desde 1853, cuando se sancionó la Constitución Nacional, varias veces reformada.

Señor presidente: cumpliendo el compromiso que había asumido inicialmente de no apartar en lo más mínimo nuestras consideraciones de los aspectos técnicos y tributarios, voy a concluir, no sin antes decir que cuando se privatizaron las empresas aéreas, los teléfonos, los barcos, los ferrocarriles, la electricidad, el gas, el petróleo, los caminos, se recaudaron 20.000 millones de dólares y se nos dijo que con esto íbamos a resolver el déficit fiscal y a pagar la deuda. Resulta que el déficit fiscal es mayor y que la deuda ha crecido.

Ahora el gobierno nacional dice que vamos a vender las centrales nucleares, la energía de Yacretá, Salto Grande, Futaleufú, las acciones clase "A", que todavía permanecen en poder de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, vamos a aumentar el IVA al 21 por ciento, y todos estos fondos, todos estos recursos, se van a ir escurriendo por los agujeros del plan económico.

No quiero asumir la responsabilidad de un futuro cada vez más incierto, señor presidente. Porque, ¿qué va a ocurrir cuando no tengamos las centrales nucleares, las acciones de YPF o la energía de estas presas, cuando ya no queden bienes por vender en el Estado nacional, cuando la capacidad contributiva del país esté exhausta con un IVA en el tope y tengamos otra crisis, que no va a ser la denominada "efecto tequila"? Será el efecto whisky, vodka o caipirinha, no sé. En ese momento vamos a preguntar de quién es esa responsabilidad histórica. Nuestra no va a ser.

Sr. Presidente (Britos). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza del bloque PAIS.

Sr. Bordón. — Nuestro bloque y nuestro interbloque del Frente PAIS Solidario reconoce la necesidad que el Poder Ejecutivo tiene de reordenar sus cuentas. También reconoce la urgencia, porque es clara la dificultad por la cual están pasando desde hace mucho tiempo —y sin demasiada preocupación por parte del Poder Ejecutivo— la producción y el trabajo argentinos y, más especialmente en los últimos tiempos, una serie de aspectos de las finanzas nacionales y también provinciales.

Hace menos de un año decíamos —y no casualmente— en la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe, que si no nos ocupábamos del campo y de la producción podíamos quedarnos sin productores y sin bancos.

Y esto es especialmente importante en el marco del plan de convertibilidad porque si es un principio económico general que la fortaleza financiera de un país se basa en la fuerza de la producción y del trabajo, no es menos cierto que cada tipo de moneda de cambio supone un sistema financiero determinado. Y si nosotros hoy tenemos atada nuestra moneda argentina a una moneda que se produce en otro país y cuyas determinaciones no se toman en la Argentina, es clarísimo —y sin entrar a discutir las bases de la convertibilidad— que, si se quiere defenderla, es fundamental obtener genuinos recursos en esa moneda. De ahí la importancia que tiene el incrementado volumen de exportaciones argentinas.

Como recordamos varias veces, desde mediados del 92 sosteníamos nuestra preocupación por modelos como el de México o el de la Argentina. Y reitero que en diciembre, en medio de la primera crisis, dijimos después de ver al presidente del Banco Central que si bien nos parecíamos, el gobierno tenía reservas, tiempo e instrumentos suficientes como para no caer en la misma situación.

Dijo en una ocasión quien fuera tres veces presidente de los argentinos, Juan Domingo Perón, que a veces, cuando no se tiene cabeza para pensar y prever, después hay que tener espalda para aguantar. Y aquí se habló del "efecto tequila"; de lo que no se habló...

Sr. Branda. — ¿A qué partido pertenecía quien fuera tres veces presidente de los argentinos, señor senador?

Sr. Bordón. — A un partido histórico, señor senador. Al Partido Justicialista al cual me honré en pertenecer y por el cual luché durante treinta años y cuyas enseñanzas no olvido.

Sigo con el tema que preocupa a los argentinos después de haber analizado la cuestión que le preocupaba a mi amigo y colega. El problema es que aquí no se trata de las espaldas de un gobierno sino de las espaldas de los argentinos.

Antes del "efecto tequila" tuvimos el llamado "efecto champagne", bebida que con sus burbujas y su alcohol por momentos nos hace sentir como si estuviéramos flotando y fuera de la realidad. Y por eso desaprovechamos un ciclo que si bien no era de los mejores en el plano de las posibilidades comerciales internacionales, era muy favorable en el plano de conseguir financiamiento barato. No es la primera vez que esto nos pasó a los argentinos; no es un patrimonio de partidos ni de gobiernos, pero espero que alguna

vez aprendamos a no desaprovechar estas situaciones.

En estos tiempos permitimos consumos superfluos que favorecerían objetivos políticos particulares y la permanencia en el poder en lugar de construir integralmente —y no sectorialmente— el futuro.

Hoy nos encontramos con un mejoramiento de las posibilidades comerciales de la Argentina en muchos rubros. Nos encontramos también con una situación muy difícil en las finanzas internacionales y sin la capacidad para defender la propia convertibilidad a través del aprovechamiento de una estructura productiva capaz de competir en el mundo, que es la forma de dar respuesta a estas mejores oportunidades que hoy nos presenta la situación internacional.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador Ricardo Laflerrière.

Sr. Bordón. — En síntesis: tenemos los mercados pero no estamos preparados en cuanto a los productos.

Digo esto porque, a partir de reconocer la necesidad y la urgencia —como dijo el senador por mi misma provincia que me precedió en el uso de la palabra—, debemos pasar a la discusión integral de los temas. No podemos ser tan irresponsables y no asumir esta tarea; y mucho menos de aquí hasta el 8 de julio, en que viviremos, por suerte, la tercera transición política. Estas urgencias y necesidades no pueden eliminar el debate integral, porque la celeridad de las horas, que nos resuelven la coyuntura de hoy, nos pueden profundizar los problemas del mañana.

Todos estamos obligados a enfrentar la crisis con responsabilidad; los que hayan tenido mayor responsabilidad en crearla y los que la hayan tenido en menor medida, porque no se trata de la crisis del oficialismo o de la oposición sino de los problemas de los argentinos.

Si bien esto es cierto y no debemos perder el tiempo, tampoco debemos permitir que las velocidades que exige la hora nos lleven a una visión apurada y desintegrada. Nuestra permanente obligación es tratar de ofrecer la mejor alternativa para garantizar una estabilidad integral y no solamente parcial, una estabilidad política —que tenemos—, una estabilidad monetaria —que tenemos—, pero también para garantizar una estabilidad productiva y una estabilidad social, que no tenemos.

Sabemos que sin estabilidad política y monetaria es ilusoria la estabilidad económica y social. Pero al mismo tiempo sabemos que sin estabilidad social y económica no hay un verdadero respaldo y asentamiento profundo de la estabilidad política y monetaria.

Por estas razones es que la coyuntura de las dificultades monetarias no nos puede llevar a no pensar en los temas productivos, sociales e institucionales del país. Entonces, si lo primero que debemos garantizar es la estabilidad integral — y no parcial — para que se defiendan mutuamente, lo segundo es que no debemos minimizar en el apuro los costos de la crisis; esto es, quién la paga. Siempre hay que buscar que sea con la mayor equidad, que no es igual para todos.

Equidad significa que los que más sufrieron y casi nada tienen no pagan la crisis; que los que más se beneficiaron y más tienen ponen más para resolver la crisis.

Sr. Branda. — ¿Me permite?

Sr. Bordón. — Ya le contesto.

El tercer elemento a garantizar es el equilibrio del funcionamiento institucional: entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución y las leyes; entre el gobierno nacional y los gobiernos de provincia en el marco de nuestra Constitución federal y de las leyes que garantizan este funcionamiento.

Por eso nuestra preocupación de que haya transparencia y claridad en las mayorías especiales que la Constitución indica en estos temas. No es chicana para no funcionar, no son atajos para no trabajar: estamos acá. Son garantías que queremos dar al presente y también al futuro. Al presente del derecho de las provincias; al futuro del Estado nacional. Porque si no hay claridad y transparencia sobre cuáles son las mayorías en lo que al voto se refiere, no se deja claro antes y no se mide con claridad antes, durante y después, podrá ocurrir en el futuro, cambiadas las coyunturas políticas electorales, que se vuelvan a alzar los juicios de las provincias contra la Nación.

Como gobernador de Mendoza, y continuando esfuerzos anteriores culminados posteriormente, también por maniobras de coyuntura de otras épocas tuvimos que levantar nuestros juicios por regalías mal liquidadas. Creo que mucho ayudó la madurez federal entre Nación y provincias para evitar costos de juicios que igualmente en muchos casos se pagaron.

Es que cuando queremos equilibrio en el funcionamiento estamos ante un problema formal que da credibilidad y previsibilidad futura a la Argentina. Pero es también un rol de defensa de

las provincias y de defensa de las futuras generaciones, para que no tengan que pagar costos por malos manejos provenientes de la coyuntura.

¿Qué significa el presupuesto en un esquema como el de la convertibilidad? Lo dije cuando discutimos hasta las tres de la mañana del 23 de diciembre del año pasado el presupuesto nacional.

Al querido amigo y colega, que ya ha hecho dos intervenciones, le decía amablemente a las 2 y 30: ¿Hasta cuándo vamos a discutir artículo por artículo? Ya se pasó el día de tu cumpleaños; no vas a llegar a la fiesta.

Pero ese día dijimos dos cosas: que las políticas de hiperestabilización frente a la hiperinflación con la cual asumió el gobierno del presidente Menem nos habían dejado sin política monetaria y sin política cambiaria — dos de las que cualquier país como la Argentina u otro de la de mayor tamaño y desarrollo tienen —, quedándonos solamente la política fiscal.

Por eso el presupuesto, junto con la calidad institucional del país, son dos herramientas fundamentales para que alguna vez podamos recuperar todos los instrumentos que un país moderno necesita para el manejo de su economía. Hoy sería una irresponsabilidad querer recuperarlos por decreto. Porque aunque tengamos ecos y dificultades que nos plantea la sobrevaluación de la moneda argentina, resolver esto por decreto sería como cuando el remedio es peor que la enfermedad.

Esta unanimidad de criterio en la Argentina es una de las bases de la estabilidad, es una de las bases de la confiabilidad que entre todos logramos.

Decíamos que ésta es la gran importancia del presupuesto como articulador de las políticas públicas y privadas, garantizador en su equilibrio de la estabilidad monetaria y también de los signos productivos y sociales que las actividades pública y privada necesitan.

También decíamos aquel día, que estábamos muy preocupados y por eso planteamos desde octubre un presupuesto alternativo. Cuando entonces votamos el proyecto en general negativamente, dijimos que si había que trabajar hasta el 30 de diciembre había que hacerlo; que era incompatible con la realidad y con la estabilidad el presupuesto para 1995 que el Poder Ejecutivo había enviado por los signos internos y externos que mostraba la economía.

Dijimos que no podíamos aprobar un presupuesto que planteaba un 9 por ciento de aumento de los gastos y un 9 por ciento de dismi-

nación de las inversiones, y en el que las hipótesis de recaudación del IVA y de incorporación de autónomos al sistema previsional no estaban basadas en la realidad; en el que la hipótesis del 6 por ciento de crecimiento tampoco estaba basada en la realidad. Esto figura en el Diario de Sesiones, señor presidente.

Dijimos que no queríamos poner palos en la rueda sino evitar traspies en el corto y mediano plazo. Quizá no imaginábamos que esto se produjera en tan sólo una semana.

Hubo circunstancias internacionales que aceleraron lo que los principales especialistas decían al respecto. A mí me lo comentó personalmente el doctor Guillermo Calvo de la Universidad de Maryland —un argentino que está por llegar una vez más aquí— allá por el mes de noviembre. Entonces, si un simple senador estaba enterado, cómo no podían estar enteradas las experimentadas y conocedoras autoridades del sector económico de este gobierno! También lo dije ese día, quizá con menor detalle. Lo cierto es que ya ha habido una modificación en los gastos, de más de 4 mil millones en tan sólo sesenta o noventa días.

Insisto en que el presupuesto marca las señales a los agentes económicos; marca las señales a los distintos niveles de gobierno; afecta directamente el tamaño de la actividad de los gobiernos provinciales y municipales. En consecuencia, no se trata de un tema menor.

Por eso, este presupuesto para 1995, antes de los sesenta días de ejecución, sufrió modificaciones en sus bases macroeconómicas, en la realidad internacional y en su propia realidad.

Si ya en aquel momento considerábamos que el presupuesto para 1995 no era realista, hoy sostenemos que lo es mucho menos. Por eso hemos insistido en la necesidad de un debate integral sobre ese tema y no de una discusión meramente parcial.

Por ejemplo, presumir que el IVA crecería más de un 20 por ciento sobre la recaudación real de 1994 y suponer que se iba a producir la incorporación de casi dos millones de nuevos contribuyentes al sistema previsional, ya era utópico entonces. Imaginémoslo ahora.

Alguien me diría: Es verdad; estamos tratando un paquete tributario. Pero resulta que en lo que hace a la política tributaria, sobre todo en tiempos de estabilidad y con una ley de estabilidad, si pretendemos defendernos entre todos los argentinos que vivimos, que trabajamos y que producimos, es necesario entender que se trata de un sistema de la política fiscal, que no es

algo aislado. ¿De qué depende? Depende del tamaño de las erogaciones; depende de los objetivos que se deseen alcanzar; depende del contexto internacional y macroeconómico en que se desenvuelve.

Entonces, no sólo era irreal la base sobre la cual se planteó el presupuesto sino que además, el contexto cambió, y finalmente se reconocieron las falacias del presupuesto para 1995. Por eso insistimos en que el realismo de las metas exige replantear toda la política tributaria en su tamaño y composición.

Los argentinos, en todos los temas, estamos dispuestos a vivir serenos y sin escapar cuando nos enfrentamos a la verdad.

Yo sé que siempre es necesario que no sólo el gobierno sino todos nosotros, planteemos qué viene más adelante y cuál es nuestra esperanza, para poder existir sobre bases de realidad.

Creo que algo que nos hace mal, algo que nos dificulta encontrar soluciones, es cierto comportamiento de los actores en la economía.

Esto ocurre cuando decimos que las cosas son lo que no son; cuando como consecuencia de haber sido presentado un presupuesto como éste nosotros decimos públicamente que es incompatible con la realidad, y planteamos un presupuesto alternativo, con las limitaciones técnicas que significa no haber estado sentado dentro del Ministerio de Economía.

Pero el Fondo Monetario Internacional ve lo mismo. Y entonces, nos vamos del Fondo Monetario Internacional, y en lugar de decir que es una decisión con un objetivo, decimos que es el triunfo de un país que ha cumplido todas sus metas y no necesita estar ahí. No lo digo yo, lo dijo el señor ministro de Economía.

Ahora se regresa, y es otro triunfo. Y aclaro que he mandado cartas precisas —no en mi carácter de senador sino en el de candidato presidencial— pidiendo especialmente que se respalde a la Argentina en estos temas, no viajando a los distintos organismos internacionales para no crear inseguridades. Y estoy acá sentado tratando este tema.

No podemos hablar de 11 mil millones de pesos. Ahí están las metas recaudatorias, la necesidad de superávit para pagar los intereses de la deuda, y la negociación prevista por el gobierno, los acreedores, por nosotros, pues los vencimientos de capital —de amortización, ya— que empiezan a vencer este año se iban a hacer con refinanciaciones con los distintos acreedores.

¿Qué vuelve a ocurrir? Si nosotros vestimos de nuevo así la situación conseguimos otro "efecto champagne" en la gente, como si no pasara nada. Y es bueno vernos unidos trabajando y al gobierno activo para que la gente no entre en pánico. Porque la Argentina no tiene que entrar en pánico. Pero es malo que recuperada la confianza mínima, que tiene que ver con la realidad que somos capaces —gobierno, oposición y argentinos— de defender sin caos y sin hipótesis de explosión, rápidamente queramos pasar de nuevo a ese triunfalismo. Porque puede volver a producirse otro "efecto champagne", y lo pagaremos más duro que éste todavía.

Es por eso que con toda responsabilidad, más allá de los aciertos y errores que todo ser humano puede tener, exponemos la necesidad de replantear toda la política tributaria en su tamaño y en su composición; toda la política fiscal, porque este replanteo va a afectar en mayor o menor medida de acuerdo a cuál sea el punto de partida de lo que haya que financiar.

El paquete de medidas diferirá, dependiendo de distintas situaciones: cuál va a ser el nivel del gasto definitivo, si se parte del mismo nivel, si partimos de un nivel corregido —que es lo que se ha hecho ahora— o si partimos de un replanteo integral del presupuesto, que es lo que estamos formulando.

Van a ser distintas las medidas, van a diferir en función del escenario macroeconómico: aquel del 6,5 por ciento del crecimiento del PBI, el 3 por ciento de que hoy habla el ministro, el del cero por ciento del que hablan la mayoría de los especialistas, o el de una caída.

¿No tenía sentido que hubiéramos discutido en profundidad este tema para no tener que estar dentro de sesenta días reacomodando de nuevo situaciones?

Obviamente que definidos estos dos temas —el nivel del gasto y el escenario macroeconómico— viene un tercer elemento que es fundamental: conocer las metas o expectativas de recaudación. Porque entonces, definido el tamaño del gasto, el escenario macroeconómico y los supuestos o metas de recaudación, ahí nos surgen con mayor ordenamiento las necesidades a financiar.

Y ahí sí aparecen las distintas alternativas: el IVA, el impuesto a las ganancias u otras combinaciones en función de una visión integral del problema.

Y definida la composición, la solución también será distinta: si tal solución es para el presu-

puesto nacional y las provincias son residuales o si se va a considerar la situación en su conjunto.

Nosotros no coincidimos con lo que explicó el miembro informante de la mayoría, porque estos 1.800 millones, que serían equilibrados en función de las nuevas metas que se plantean, quedan por un lado fuera de lo que es habitualmente la ley; de nuevo estamos en una emergencia y no se puede vivir en emergencia.

En segundo lugar, no queda muy claro si es dentro de los 18 meses o si es mes a mes. Tengo la sensación una vez más de que se resuelve el tema nacional sobre un planteo muy habitual, que es el de creer que todas las responsabilidades son de las provincias.

Nos debemos un debate con el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en este recinto, sobre el gasto nacional y provincial. Deberíamos analizar los casos de todas las provincias argentinas —y hacerlo en forma comparativa— para ver si ellas son las responsables en forma unánime y global de todas las dificultades, y para saber si sólo al producir el ajuste sobre ellas se encontrará la solución al problema.

Cuando hablo de unir esta decisión con una modificación presupuestaria, lo hago con fundamento. Yo pedí que los anexos II a V —que son novedosos, ya que nunca hubo tanta información; esto lo reconocí— formaran parte de la ley de presupuesto y no fueran sólo un adicional teórico.

Hoy queda claro lo importante que esto hubiera sido; lo tendríamos que estar debatiendo en forma integral.

Sin embargo, en el marco de lo que este tipo de presupuesto permite, el gobierno ha dado orden de disminuir dos mil millones de pesos.

Al mismo tiempo, el cambio de la situación financiera lo ha obligado, lógicamente, a prever un aumento de 500 millones de pesos en concepto de mayores costos financieros.

Personalmente, insisto en que debe hacerse un trabajo detallado por parte del Ejecutivo y de este Parlamento, sin demagogias y sin desesperación electoral. Porque no veo cuál puede ser el negocio para el oficialismo de quedarse en el poder o para la oposición acceder a la Presidencia de la Nación el 8 de julio en peores condiciones. No advierto cuál puede ser el negocio para los dirigentes políticos y mucho menos para los argentinos, para cada uno de nosotros.

Creo que hay que animarse a hacer más reducciones que las que se han planteado. No estoy haciendo un análisis en detalle, pero sí

aclarando que además de estos 500 millones previstos tenemos partidas no asignadas por 1.220 millones.

Podríamos disponer una reducción del 30 por ciento respecto de ciertas actividades centrales y comunes: en distintos sectores de la burocracia, entre los 250 y los 300 millones de pesos; eliminación y reducción de programas por unos 500 millones; un 20 por ciento de reducción de gastos en organismos de regulación; eliminación de algunos programas; reducción —en un 50 a 70 por ciento— de partidas destinadas a ciertos gastos de publicidad; prohibición casi total de gastos reservados en todas las áreas, salvo los mínimos necesarios para el funcionamiento del Estado y, en particular, de la Presidencia. Algunos ingresos extraordinarios; es un detalle, pero a tener en cuenta si la crisis es tan grande. Por ejemplo, según las primeras cifras que barajamos, podría efectuarse una modificación con relación a la flota de transporte presidencial sin impedir la seguridad y velocidad de desplazamiento que el Poder Ejecutivo necesita. Con esto podríamos ahorrar 50 millones más.

Hemos sumado, rápidamente, 3 mil millones de pesos. Es claro que así tampoco se puede discutir. No estoy promoviendo esto; estoy diciendo que éste es el trabajo que, a mi entender, habría que hacer.

Debemos tener en cuenta cuál es la presión que ponemos sobre la sociedad argentina en materia de impuestos; o cómo funciona mejor o peor la modificación de los impuestos con relación a este perfil exportador, que permita defender con elementos genuinos la convertibilidad, que está basada en una moneda cuyo funcionamiento, nivel y cantidad no dependen de nosotros sino del extranjero.

Comparto la preocupación expresada anteriormente respecto del ámbito federal, porque las finanzas provinciales recibirán un fuerte impacto debido a esta decisión.

Se ha reconocido una pérdida en la recaudación respecto de lo estimado del orden de los 3.750 millones de pesos, en recursos que son coparticipables. Y el paquete impositivo reconoció un aumento de unos 4.250 millones de pesos.

Si no se coparticipa este monto se estaría aceptando que el conjunto de las provincias reduciría sus recursos en casi 2.500 millones de pesos.

Insisto en expresar la preocupación que tenemos respecto de esta legislación especial que se ha planteado en forma alternativa.

Sr. Branda. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Bordón. — Sí, señor senador.

Sr. Presidente (Lafferrière). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Recuerdo a ambos señores senadores que está cerca de finalizar el tiempo de exposición del señor senador por Mendoza.

Sr. Branda. — Haré una muy breve exposición. Sólo formularé una acotación al señor senador por Mendoza.

La coparticipación federal tiene una garantía básica que de ninguna forma el Estado nacional puede dejar de pagar. Así que cuando en determinado momento no se recaude lo suficiente, el Estado deberá conseguir el dinero de algún lado y pagar lo que corresponde. Esto es lo que está haciendo actualmente el gobierno nacional.

Sr. Presidente (Lafferrière). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bordón. — Es atinada la opinión del señor senador por Formosa pero no es coherente con la realidad, habida cuenta de que las provincias se han manejado con una hipótesis de recaudación que ahora se propicia modificar.

Si bien no voy a emplear todo el tiempo de que dispongo, quiero aclarar que, según entiendo, como miembro informante tengo una hora para hacer mi exposición. No sé si el criterio ha sido modificado. De cualquier manera, informo que ya estoy por terminar mi alocución, pero quisiera saber si es correcto que como miembro informante dispongo de una hora para hacer uso de la palabra.

Sr. Presidente (Lafferrière). — La Presidencia pide disculpas por su error de interpretación.

Sr. Bordón. — De acuerdo. Lo que sucede es que en esta ocasión el señor presidente del bloque me concedió a mí la responsabilidad de ser el miembro informante en este tema. Votamos y salimos uno a uno; no sabíamos quién iba a hablar porque estábamos empatados; finalmente, él me concedió la oportunidad de ser miembro informante. *(Risas.)* No obstante, sólo voy a hacer uso de la palabra durante cuatro o cinco minutos más.

Algo que me llevó a reflexionar fue que para adoptar esta posición modificadora se exige en este debate reconocer la situación del conjunto de las provincias y de los municipios. Porque aunque sé que todos lo sabemos, vale la pena recordar qué cosas hacen las provincias en la actualidad: dan justicia, seguridad, educación pri-

maria o básica, educación media o polimodal, salud, desarrollo, inversión pública, infraestructura, etcétera.

Por otro lado, y ésta es una respuesta más integral a la correcta apreciación técnica que hacía el señor senador por Formosa, no se pueden comprometer a futuro las fuentes de financiamiento que hagan —si bien no en lo legal, sí en la práctica— imposible una discusión de una nueva ley de coparticipación, que es uno de los temas sobre lo que teníamos —y tenemos— que trabajar.

Lo que planteamos es que de nada servirá el equilibrio del presupuesto nacional si se traslada el desfinanciamiento a las provincias y a los municipios. Necesitamos un equilibrio global. No sirve sólo el equilibrio de alguna de las partes. Tampoco tendría sentido —pensando en función provincial— desequilibrar a la Nación; nosotros no estamos planteando un federalismo feudalizador y feudalizante, sino el equilibrio entre las distintas partes.

Además de las observaciones que hicimos y que más adelante ampliará el señor senador por Catamarca del bloque PAIS, señalo que nuestro voto negativo no es para restar aportes u opiniones sino, tal como lo hicimos en la madrugada del 23 de diciembre pasado, para advertir que por la vía de los parches rápidos vamos hacia nuevos parches rápidos, ya sea antes o después. Acá hay que tener una visión integral del equilibrio: el institucional, el monetario, el productivo, el social, que se refuerzan y se sostienen mutuamente. Por eso, proponemos un análisis integral del presupuesto nacional y de las finanzas provinciales. También propiciamos un análisis alternativo del paquete tributario.

O sea, un presupuesto nacional que reanalice integralmente su situación, que revise los supuestos macroeconómicos y que revise y explicité más precisamente la recaudación de impuestos. Si bien sé que es difícil, me gustaría que buscarámos explicitar los efectos "incrementales" de la alícuota sobre precios-consumo en distintos sectores de ingresos, tema sobre el cual se expusiera anteriormente el senador preopinante.

Otro tema al que quiero hacer referencia es el estado de las finanzas provinciales y su esquema de ahorro, inversión y financiamiento. Esto no es nuevo, no es un debate de hoy. Estoy reiterando un pedido de informes, cuya respuesta no recibimos. Me refiero al expediente 310-D.-94, en el que solicitábamos información global sobre este tema porque consideramos que todos los lu-

gares del país no atraviesan por la misma situación; necesitamos una visión integral para tener una respuesta integral. Esto no lo planteamos hoy sino que en su momento pedimos información consolidada por sectores, niveles y provincias para hacer este debate, porque sabíamos que venían épocas difíciles.

Y una tercera cuestión está vinculada con el planteo de alternativas de financiamiento.

Finalmente, con nuestra presencia hoy aquí, en este debate que se efectúa con pasión pero con respeto, y con las advertencias que hicimos el año pasado, cuando nos quedamos hasta la madrugada del 23 de diciembre discutiendo artículo por artículo a pesar de que perdíamos la votación, hemos querido aportar una visión que reconoce la necesidad y urgencia de la situación que vivimos debido a los problemas estructurales de vieja data en la Argentina, a los problemas que errores de la actual gestión gubernamental nos han generado y también al impacto que está produciendo una nueva situación internacional, que a nuestro entender era previsible.

No es seria una oposición que diga que no hay impacto internacional en nuestros problemas, pero a fin de tener una visión integral y sincera, no sólo para nosotros sino para la gente, para los actores de la economía, para aumentar la confianza y la credibilidad no en uno u otro dirigente o en uno u otro partido sino en el conjunto del funcionamiento del sistema institucional argentino, también necesitamos un oficialismo que reconozca que hay dificultades que se han generado por errores o falta de previsión.

Por eso aceptamos la necesidad y la urgencia, pero también reconocemos que este tema debe resolverse integralmente, en todos sus aspectos, en el marco del pleno respeto y transparente interpretación de la Constitución y las leyes.

El Poder Ejecutivo tomó su decisión y nosotros estamos cumpliendo con nuestra obligación al estar dispuestos a trabajar en nuestras bancas, pero adelantamos que nuestro voto será negativo.

Sr. Presidente (Lafferrière). — Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del bloque liberal.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: el proyecto que estamos considerando modifica el título VI de la ley 23.966, en lo referente al impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso productivo y, además, dispone la creación de un fondo especial para el equilibrio

fiscal, que se constituirá con la asignación adicional de tres puntos sobre la alícuota del IVA.

Asimismo introduce un artículo referido a la obligación del Estado nacional de efectuar un aporte no reintegrable de 1.200 millones de pesos para contribuir a financiar la reforma de la banca provincial, de los estados provinciales, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, disponiéndose finalmente la prórroga hasta el 1º de abril de 1996, de lo convenido en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.

Vale la pena analizar, dentro del contexto de la crisis en que nos hallamos, cuáles serán los efectos de las normas que se propone aprobar, es decir, qué beneficios conllevarían y los perjuicios que podrían acarrear al sector productivo y a los consumidores, habida cuenta de las modificaciones impositivas que surgen del aumento de la alícuota del IVA y de la extensión del gravamen definido por la ley 23.966 correspondiente a los bienes personales no afectados a la producción, como es hasta ahora el régimen vigente.

La evolución de los acontecimientos económicos sucedidos en nuestro país a partir de finales de 1994 comenzó a mostrar señales de alerta, que el gobierno parece haber minimizado.

Tanto es así que a fines del citado período el Poder Ejecutivo requirió al Congreso la aprobación de un proyecto de ley por el que se solicitaba autorización para aumentar el presupuesto de 1994 en 1.400 millones de pesos.

Al efecto, podríamos preguntarnos con qué objeto pedía el mencionado aumento. El argumento era que la autorización requerida era para arreglar las cuentas, pero que no iba a pedir más dinero porque recurriría al ahorro en otras cuentas.

Sin lugar a dudas esto no resultaba un buen augurio. Implicaba, como podrá deducirse, un desfase presupuestario, ya que existían partidas dentro del mismo que habían sido superadas en sus previsiones iniciales.

El presupuesto del corriente año también ofreció grandes dudas en lo que respecta a las estimaciones realizadas.

El artículo 4º aludía a un supuesto equilibrio entre recursos y gastos, pero posteriormente se señalaba que faltaban 6.200 millones de dólares o pesos para cubrir las amortizaciones de capital que no fueran refinanciables.

De esto resultaba a las claras la existencia de un déficit que sólo podría compensarse con fi-

nanciamiento. Cabe preguntarse entonces cuál fue el motivo por el que no se atacó con antelación un problema que se veía venir, que materializado en un déficit fiscal resultaba una señal muy preocupante para una sociedad como la nuestra, que aun presionada por los efectos de las hiperinflaciones pasadas asocia sabiamente el déficit fiscal con la emisión monetaria y con la inflación.

Ante estas señales de peligro el conjunto de los inversores y la sociedad reaccionaron como era previsible, es decir, con temor. Por lo tanto, trataron de proteger sus intereses. De nada valen en estos casos casi cuatro años de disciplina fiscal, si se tiene en consideración que nuestra historia económica de las últimas décadas no ha sido precisamente muy acertada en la materia que nos ocupa.

Por estas circunstancias, a las que se agregan los hechos externos —que son de dominio público—, las dificultades del programa económico en el plano fiscal se hicieron evidentes en el primer bimestre de este año. En febrero, en particular, la recaudación tributaria fue de 3.300 millones de pesos y resultó 2,1 por ciento menor a la del mes homólogo de 1994. En el caso de la Dirección General Impositiva la disminución fue del 2,7 por ciento y la de la ANSES del 20,2 por ciento. La recaudación en el primer bimestre del año resultó 6,4 por ciento menor a la del mismo período de 1994. Durante aquel lapso el sistema financiero operó bajo condiciones de alta tensión. Allí pudo constatar que se produjo una fuga de capitales del sistema financiero, cuyas cifras son de tal magnitud que generan preocupación en todos los sectores de la sociedad.

Por efecto de la iliquidez, la tasa de interés en el circuito interfinanciero aumentó significativamente en la segunda quincena de febrero y en la primera de marzo, llegando a casi el 70 por ciento anual. Estos valores decrecieron de manera significativa, fundamentalmente a partir del anunciado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que no se había logrado por efecto de las medidas económicas anunciadas por el ministro Cavallo, lo que muestra a las claras que existe una crisis de confianza que requiere de señales positivas del sistema económico internacional.

Felizmente la situación actual parecería que tiende a estabilizarse. En ello deben reconocerse algunas medidas acertadas por parte del gobierno nacional como también el apoyo explícito de los organismos de crédito internacional, y

también la labor del Congreso que con espacio de pocos días ha sancionado normas legales de vital importancia para la corrección del rumbo económico; de este Congreso, señor presidente, tan vapuleado y a veces tan vilipendiado, pero que no ha desertado de sus deberes, prestando el quórum, disintiendo lealmente, pero no tapando el acceso a ninguna solución verdadera.

En este momento estamos abocados a considerar este proyecto de ley que ha sido aprobado hace pocas horas en la Cámara de Diputados y del cual sólo teníamos noticias por la lectura de los diarios de esta mañana. Eso explicará las deficiencias que puede tener nuestro estudio sobre el tema y la consiguiente exposición de detalle.

En este proyecto se quieren modificar varias de las normas de la ley 23.966 cuyo título VI creó un impuesto que se dio en llamar "Impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico".

El espíritu del que estaba imbuida la creación de este impuesto respondía a una inquietud basada en pautas de equidad tributaria. Como todos sabemos, este principio de equidad en materia tributaria está consagrado expresamente en el artículo 4º de la Constitución Nacional. Lo que entonces se pretendió fue implementar una carga tributaria respecto de bienes que al no formar parte del proceso productivo eran ociosos.

Esa circunstancia fue la que motivó que por nuestra parte brindáramos apoyo a la iniciativa, si bien tuvimos ocasión de expresar nuestras dudas en cuanto a la baja magnitud del patrimonio exento de tributo, que fue fijado en la suma de 100 mil pesos. Lamentablemente con este proyecto se desnaturaliza aquella loable finalidad, ya que se lo extiende a todo tipo de bienes personales, independientemente de que ellos estén afectados a procesos productivos.

Si bien formalmente esto se propone por la vía de modificar un tributo existente, no es necesario ser muy perspicaz para darse cuenta de que en rigor lo que se está haciendo es nada más y nada menos que crear un nuevo impuesto. En efecto, lo que se está pretendiendo al generalizar de tal manera la base imponible es resucitar el impuesto al patrimonio.

No soy economista ni especialista en temas tributarios, pero todos sabemos que el progreso de la economía se encuentra sustancialmente condicionado a la reactivación del aparato productivo. Los hechos acaecidos en los últimos tiempos muestran la importancia y significación del crecimiento económico en el sostenimiento de la es-

tabilidad y de la convertibilidad. Es impensable hablar de crecimiento en un marco de inestabilidad, pero debe tenerse presente que la estabilidad económica no puede sostenerse sin un marcado incremento de la actividad productiva, pudiéndose afirmar que como antes la estabilidad era el requisito indispensable para el crecimiento, hoy debe tenerse en cuenta que el crecimiento debe constituirse en el reaseguro de la estabilidad. Son dos caras de una misma moneda.

Creo que estas premisas serán compartidas por todos mis colegas, independientemente de nuestras distintas banderías políticas.

En la sesión de ayer tuvimos ocasión de aprobar un proyecto de ley tendiente a reactivar la actividad productiva de las pequeñas y medianas empresas y también aprobamos otro proyecto de ley de idéntica finalidad estableciendo normas de flexibilidad laboral.

Señor presidente: yo me pregunto si hoy no estaremos borrando con el codo lo que ayer escribimos con la mano. Porque si estamos creando una carga tributaria que habrá de gravar una gran generalidad de bienes, aun aquellos que están incorporados al proceso económico, no hacemos otra cosa que castigar al sector productivo, es decir al sector que antes queríamos favorecer con otros instrumentos desarrollando su acceso al crédito y consagrando normas legales más flexibles.

Como puede observarse, la contradicción parece insalvable y mucho me preocupa, especialmente, que se graven las actividades agropecuarias que es uno de los pilares, sin duda el más importante, de nuestra actividad económica y de nuestra competitividad internacional.

El régimen de la ley 23.966 establece la exención del tributo para los inmuebles rurales; ahora dicha exención se quiere eliminar.

En el caso particular de la provincia de Corrientes, la actividad agropecuaria reviste una importancia vital. Por lo demás, la generalidad de los productores se identifica con las pequeñas y medianas empresas, y si ayer les creamos los instrumentos necesarios para su reactivación, resulta que hoy se los quitamos. Como se dice popularmente: "una de cal y otra de arena".

Son conocidos los acuciantes problemas que padecen los productores agropecuarios de mi provincia y del conjunto del país, sobre todo los pertenecientes a las denominadas economías regionales. Asimismo, el estancamiento y la desinversión han traído como consecuencia directa la carencia de puestos de trabajo. Todos son su-

cesos originados en una falta de asistencia crediticia y en el endeudamiento que ahoga a dicho sector. Y ante esta realidad, paradójicamente, el Estado nacional responde con mayores cargas fiscales como si el sector que nos ocupa tuviera capacidades ilimitadas para absorber presiones impositivas.

¿Cuál sería el cuadro de situación que podría presentarse? ¿Pueden los productores agropecuarios hacer frente a esta nueva realidad? Claramente, la respuesta es negativa pues este sector en muchos casos tiene una rentabilidad negativa, subsistiendo merced a la voluntad y hasta por el sentido patriótico y de arraigo de parte de sus actores.

A esto debe agregarse lo que acontece en el contexto internacional. La caída de los precios internacionales y los cada vez más elevados costos fiscales y de producción tornan dificultosa la competitividad del sector agropecuario que, con esta nueva imposición, ve complicada aun más su rentabilidad y, por ende, la subsistencia de una actividad que es pilar de nuestra economía.

A título de ejemplificación de lo expuesto, quiero hacer referencia a lo expresado por la Sociedad Rural Argentina en un comunicado de prensa que sintetiza las inquietudes del sector con argumentos de mucho peso.

Señala que si se aprobara este proyecto habría de reimplantarse la triple imposición sobre la tierra. Afirma que la medida altera el rumbo del gobierno en materia fiscal en cuanto ésta tenía por objeto eliminar los impuestos distorsivos en consonancia con las normas del Pacto Fiscal. Finalmente, señala que habrán de desalentarse las inversiones y se restará credibilidad al plan económico, censurándose que se pretenda equilibrar el presupuesto con el aumento de la presión impositiva sobre el sector productivo.

De la misma inquietud se ha hecho cargo Coninagro, aclarando que la incidencia del impuesto sobre el sector implicará que cada productor sufrirá tres veces una imposición sobre la misma base imponible, a saber —y leo textualmente—: impuesto a los bienes personales, nacional, 0,5 por ciento; impuesto inmobiliario, provincial, 1 por ciento; tasa vial, municipal, 0,5 por ciento.

En resúmidas cuentas, señor presidente, creo que implicará un grave retroceso aprobar este nuevo tributo con que se va a gravar y castigar al sector productivo nacional; y no solamente por su falta de equidad, sino porque acarrea el riesgo de ocasionar una grave crisis recesiva en el país.

Cuando la presión tributaria llega a límites insostenibles no sólo no se logra el objetivo de mejorar la recaudación tributaria, sino que se desalientan las actividades productivas, máxime en el caso de que esa presión se ejerza, precisamente, sobre uno de los sectores más castigados de la economía.

Vamos a analizar ahora el artículo 3º referido a la creación de un fondo especial para el equilibrio fiscal, para lo cual se incrementa en tres puntos la alícuota del IVA. Dicho artículo expresa que se va a constituir un fondo de asignación específica con lo obtenido mediante el incremento de la alícuota citada, recurso que no será coparticipable con las demás jurisdicciones, contrariando de esta manera lo dispuesto por la ley 23.548, de coparticipación federal.

Debe tenerse presente, además, que la Disposición Transitoria Sexta de la Constitución Nacional establece que "...tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma..."

Podrá argumentarse que al elevarse la alícuota en tres puntos y disponerse que ese incremento es el que administrará el Tesoro Nacional no se perjudica a las provincias, que continuarán coparticipando sobre los niveles vigentes. Pero en realidad las provincias tienen derecho a coparticipar sobre la totalidad de lo recaudado por el impuesto. Esta es la garantía de que gozan en cuanto a la recaudación de los impuestos coparticipables y es por ello que manifiesto mi oposición a este punto, dado que aquí se produce una apropiación indebida de recursos que deben distribuirse entre las distintas jurisdicciones en función de los índices definidos por la ley 23.548.

Si la alícuota se incrementa en tres puntos, o en cualquier magnitud, el espíritu del régimen de coparticipación de los recursos tributarios determina que ese "plus" también se distribuya entre las provincias. Pretender lo contrario implica tanto como privarlas de ingresos legítimos que les corresponden.

No se me escapa, señor presidente, y ya lo he mencionado, que la recaudación tributaria atraviesa por momentos difíciles, ya que no se están cumpliendo las pautas presupuestarias. Pero estas deficiencias en manera alguna pueden ir en desmedro de los derechos que en materia de ingresos por impuestos coparticipados pertenecen legítimamente a las provincias, que son también, señor presidente, parte inescindible de la emergencia nacional.

Quiero referirme ahora sucintamente al artículo 4º del proyecto, por el que se establece que la Nación se obliga a efectuar un aporte no reintegrable por 1.200 millones de pesos en los próximos 18 meses para contribuir a financiar la reforma de los estados provinciales, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de la banca provincial y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose que al cumplir sus objetivos dichos recursos se distribuirán entre las provincias en la proporción en que les corresponde según el régimen de coparticipación federal.

Quiero hacer aquí una advertencia, señor presidente, sobre todo porque se ha puesto mucho énfasis en las publicaciones periodísticas y en diversas declaraciones que se han hecho en estos últimos días, insistiéndose en que esta disposición —por lo menos así lo he entendido yo— estaba dirigida básicamente y en forma gruesa a ayudar a las provincias a fin de que pudieran proceder a la privatización de los bancos provinciales, que aún no habían hecho y que son mayoría.

Sobre este punto quiero recordar, señor presidente, que mi provincia procedió a realizar esa privatización hace ya varios años. Y no solamente realizó esa privatización sino otras. Es decir que ha estado cumpliendo con sus deberes, como vulgarmente se dice. Estimo que en forma alguna esta disposición puede ser interpretada el día de mañana retaceando el derecho que le pertenece a Corrientes de participar en la distribución —conforme lo dice el artículo en su parte final—, porque esto sería realmente insoportable. No sería justo que se premiara a quienes hasta ahora no han cumplido con esa requisitoria del gobierno nacional y que se castigara con la no disposición de la parte proporcional de los fondos que les corresponden a quienes han tenido la visión, la fuerza y el coraje de adoptar en su momento, ya hace tiempo, las directivas generales de la política nacional.

Señor presidente: para terminar, quiero decir que no hay, de ninguna manera, una especulación política en esta posición negativa que vamos a sostener con respecto al proyecto materia de consideración.

Dejo constancia de que no nos merece, desde luego, ninguna objeción el artículo 5º, por lo cual no me referiré a él.

Repito que no hay especulación política. Nunca la hemos tenido: mucho menos cuando tantas veces en el curso de estos años hemos adoptado sin especulación alguna posiciones que

podían resultar dañosas para vastos sectores de la comunidad y ser discutibles desde el punto de vista de la popularidad política pero no lo eran para nuestro convencimiento de que había que apelar a medidas drásticas y actuar a fondo para buscar la rehabilitación de nuestra economía, removiendo distintos obstáculos de índole estructural que, sin duda alguna, pesaban negativamente en los intereses superiores del país.

Reconocemos la necesidad y la urgencia que existen hoy respecto de muchas medidas a las que directa o indirectamente hemos prestado nuestro apoyo. También reconocemos esta urgencia que tiene el gobierno de la Nación. Pero creemos que cuenta con suficientes recursos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En cambio, reclamamos que también se respete nuestro derecho a la disidencia, cuyas causas han sido expuestas sucintamente en esta deshilvanada exposición que he tenido que hacer y llevaron a los diputados de nuestro partido a adoptar una posición negativa sobre este tema en la Cámara de Diputados de la Nación.

Esa posición negativa tuvo una fundamentación muy clara, muy alejada de la especulación; sabíamos que no iba a lesionar en modo alguno intereses nacionales, y estaba inspirada —como lo está nuestra actitud esta noche— en la defensa de indelegables deberes que nos corresponden a nosotros, sobre todo a los senadores, como abogados de nuestras provincias, como aquellos que recibimos el reclamo de nuestros pueblos y organismos provinciales respecto de la obligación perentoria de ser leales con lo que juramos defender.

Por estas razones, adoptaremos esta posición negativa, en coherencia con la actitud que oportunamente tuvieron nuestros diputados. Hemos mostrado que no somos insensibles cuando llega el momento supremo de solucionar los problemas de índole nacional, lo que perfectamente le consta a la mayoría, que sabe cuál ha sido nuestro comportamiento en las horas felices y en las que no lo fueron, que sin duda alguna son mayoría.

No somos insensibles a esa circunstancia pero tampoco lo somos a un llamado de nuestra conciencia, en cuya defensa vamos a adoptar la posición negativa respecto del proyecto en consideración.

Sr. Presidente (Lafferrière). — La Presidencia hace saber a la Cámara que ha ingresado de la Cámara de Diputados una comunicación que informa un error material en la redacción de uno

de los artículos del proyecto de ley que estamos considerando.

A partir de esta comunicación se ha formado el expediente número C.D.-V/95, que ha sido distribuido a los señores senadores para su introducción en este debate, por formar parte como le de erratas del tema en discusión.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Pinuzzi). — (*Lee*)

Buenos Aires, 16 de marzo de 1995.

Señor secretario parlamentario del Honorable Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de poner en su conocimiento que en la sanción del proyecto sobre modificación del impuesto sobre bienes personales no incorporados al proceso económico (ley 23.966, expediente 258-D-95), el texto del artículo 1º, punto 4, debe leerse de la siguiente forma:

4. Sustituyense el antepenúltimo y el penúltimo párrafos del inciso *a*) del artículo 22, por los siguientes:

En el caso de inmuebles rurales, el valor determinado de acuerdo con los apartados anteriores, se reducirá en el importe que resulte de aplicar un veinticinco por ciento (25%) sobre el valor fiscal asignado a la tierra libre de mejoras a los fines del pago del impuesto inmobiliario provincial. Al valor del inmueble, en el caso de zonas áridas con perforaciones de agua bajo riego, se descontará el valor de estas perforaciones. Se entenderá que los inmuebles revisten el carácter de rurales, cuando así lo dispongan las leyes catastrales locales. No será considerado como mejora el riego público que beneficie a un determinado predio.

El valor a computar para los inmuebles, de acuerdo con las disposiciones de este inciso no podrá ser inferior al de la base imponible —vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquide el presente gravamen— fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares. Este valor se tomará asimismo en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el valor a la fecha de ingreso al patrimonio. Si se trata de inmuebles rurales el importe aludido se reducirá conforme a lo previsto en el párrafo anterior.

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, del valor determinado de conformidad a las disposiciones de este inciso podrá deducirse el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos que hubieren sido otorgados para la compra o construcción de dichos inmuebles o para la realización de mejoras en los mismos.

Asimismo en el texto del artículo 1º punto 6, inciso *b*), a continuación de la frase "...valuando el capital" debe leerse, "(activo menos pasivo)".

Saludo a usted muy atentamente.

Juan H. Estrada,

*Prosecretario Parlamentario
H. Cámara de Diputados de la Nación*

Sr. Presidente (Lafferrère). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes del Partido Autonomista.

Sr. Romero Ferris. — Señor presidente, señores senadores: con premura y urgencia estamos considerando hoy este proyecto de ley en revisión.

Comprendemos la situación: no estamos ajenos al hecho de que en este momento — así lo ha manifestado el propio señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos en la Cámara de Diputados de la Nación — el país está viviendo una situación de profunda crisis.

Con responsabilidad, pero siendo coherentes con la posición que permanentemente hemos asumido, e interpretando que el interés superior de la Nación está por encima de cualquier otro, teniendo en cuenta la unidad dentro de la diversidad, con el respeto que nos merecen cada una de las opiniones, quiero fijar concretamente cuál es nuestra posición.

Mi intervención será breve, pero manifestaré claramente la postura que hemos asumido en diversas oportunidades y que — como acaba de señalar mi colega el señor senador Aguirre Larruri — es la que adoptamos en toda nuestra actuación en el Honorable Senado de la Nación.

Hemos tratado de facilitar las soluciones, pero también hemos manifestado nuestras discrepancias cuando las circunstancias así lo exigen.

Por eso, mi presencia en este recinto — como dije antes — responde al compromiso siempre asumido de no rehuir en ninguna instancia el debate sobre todas las cuestiones que afecten los intereses de la Nación y de manera especial — como ya lo he manifestado —, cuando ellas presentan el carácter de grave emergencia y de profunda crisis económica y financiera, como la que hoy estremece hasta las más cómodas estructuras de nuestra sociedad.

Lo que pretendo es que en esta ocasión también se examinen con detenimiento y en profundidad las causas que han provocado que una economía que hasta hace poco — no más de cuatro meses — se hallaba en pleno equilibrio fiscal — como se afirmaba desde las más altas esferas del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos —, a tal punto que podíamos no utilizar los últimos tramos del crédito de facilidades extendidas del Fondo Monetario Interna-

cional, se haya pasado a una situación en la que, además de profundos recortes presupuestarios a los gastos aprobados, se produzca este aumento desmedido del impuesto al valor agregado paralelamente a la sanción de nuevos impuestos a la reimplantación de los aportes patronales, al restablecimiento de la tasa de estadística a las importaciones, y la reducción o eliminación de los reembolsos a la exportación.

También se ha anunciado que se someterá a consideración de este Congreso la modificación de las bases impositivas en el impuesto a las ganancias a efectos de incrementar la recaudación. Por otra parte, día a día, se exteriorizan nuevos créditos por miles de millones de dólares que darían solución al problema argentino.

Sin duda alguna, el detonante de la crisis fue la modificación de la política cambiaria de México, país que nos ha servido de modelo en lo económico y de cuya imagen hoy queremos despegarnos, aunque no fuera fácil corregir al propio ministro de Economía cuando afirmaba que la Argentina era México, sólo que dos años más tarde.

El 20 de diciembre pasado el presidente Zedillo toma esa medida y de modo casi instantáneo nuestro mercado acusa profundamente el golpe y reacciona con una baja generalizada del Mercado de Valores —más pronunciada en cuanto a la cotización de los títulos públicos—, una caída en los depósitos del circuito financiero y el comienzo de una fuga de capitales que no esconden su naturaleza de "fondos golondrina".

Se dirá que la crisis fue generalizada y que se abatió sobre todos los países emergentes, que alcanzó incluso a los países de Asia y también a algunos de Europa. Pero a partir de la decisión del presidente de los Estados Unidos de América de brindar un apoyo excepcional a México, la crisis se fue atenuando en su gran mayoría para persistir aquí, pero en forma creciente, con mayor intensidad, a punto tal que la semana próxima pasada el mercado financiero aparecía sin salida.

Me pregunto entonces, primero, si fue necesario llegar a este extremo antes de reconocer y aceptar lo que desde un primer momento se reclamó: el restablecimiento de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional; no porque me haga particularmente feliz este hecho, que simplemente denota el grado de dependencia de nuestra economía, sino porque se convertía en una exigencia ineludible de nuestros acreedores externos.

¿Por qué México y la Argentina quedaban inmersos en la crisis y tanto Brasil —pero particu-

larmente Chile— salían de ella con menores afectaciones? Una primera razón, inmediata y a la vista, es la falta de dependencia de los capitales externos.

Chile exporta capitales y buena prueba de ello son las importantes inversiones que ha realizado en nuestro país, en los procesos de privatización, y también en grandes sectores de la industria y del comercio.

Brasil, si bien no tiene estas características, tiene un fuerte superávit comercial que le provee las divisas necesarias para superar estas coyunturas, superávit que protege con los clientes cerrados acudiendo a toda medida necesaria para tal fin, inclusive la corrección del valor de su moneda.

Ambos países han protegido su comercio exterior, siendo fuertemente superavitarios y a la vez han restringido el movimiento de capitales, impidiendo que los llamados *hot money* entren y salgan a voluntad, haciendo importantes diferencias y desnivelando los mercados siempre en el sentido opuesto; es decir, retirándose cuando hacen falta o regresando cuando sobran.

En México y en nuestro país hemos hecho lo contrario: hemos privilegiado la apertura y el ingreso masivo de productos extranjeros, financiando el tremendo déficit comercial que ello originaba a través de un creciente endeudamiento.

Ambos países habían sufrido los efectos del endeudamiento anterior y fue propiamente México el que en 1982 inició la crisis internacional de la deuda externa.

Para salir de ella, la Argentina decidió entregar el producido de la venta de sus empresas públicas para cancelar, al menos parcialmente, esa deuda. Además firmó, sin anuencia de este Congreso de la Nación, un plan de refinanciación de la deuda comercial con los bancos externos por treinta años.

Pero nada de esto es suficiente para una economía que es deficitaria en la generación de divisas. La Argentina no produce las divisas que necesita para importar los bienes indispensables para su vida económica y mucho menos para su crecimiento. Los capitales se han retirado y hoy la Argentina necesita indispensablemente su concurso para sobrevivir, para lo cual tiene que aceptar todas las imposiciones que se le efectúan y esta reunión es el producto de una de ellas.

Hay que generar superávit fiscal a cualquier precio y la primera y más fácil medida es aumentar el impuesto a los consumos. A pesar de tanta promesa, el requerimiento del Fondo Mo-

netario Internacional es superior y, como siempre, se acude a lo que es más simple para recaudar: el impuesto al valor agregado.

Pero acá se está pasando no solamente por arriba de los compromisos anteriores; se está pasando por arriba de la Constitución Nacional cuando se decide no coparticipar su producido. Esto ha quedado perfectamente establecido en el punto 6º de las disposiciones transitorias de nuestra Carta Magna: no se puede introducir ninguna variable a las actuales normas de coparticipación federal hasta tanto se sancione la nueva ley en la materia.

Señor presidente: no se trata ya de una modificación en el orden del artículo 75, inciso 3, por más que el artículo intente esa suerte de disfraz. Se está deformando la propia ley de coparticipación federal mediante este camino, procedimiento que rechazo íntegramente.

Del mismo modo, la extensión hasta el 1º de abril del año próximo del cumplimiento de las cláusulas de materia tributaria ha sido introducida de manera forzada en este texto para postergar un debate importante como sigue siendo la relación fiscal con las provincias argentinas.

Considero que tampoco es apropiada la redacción del artículo 4º, relativo al aporte no reintegrable de la Nación por 1.200 millones de pesos; su distribución en función de la coparticipación queda poco clara en la expresión que dice "Al cumplir sus objetivos. . .", porque introduce una condicionalidad que somete a la decisión del propio Poder Ejecutivo la realización de estas entregas.

El federalismo, hoy más que nunca, vuelve a ser letra muerta. Solamente parece servir para hacer responsables a las provincias de todos los problemas que acucian al gobierno central.

Pero repito lo que antes tantas veces he dicho aquí, en este recinto y en cualquier otro lugar que correspondía: las provincias no son las culpables del endeudamiento externo; no fueron las que generaron la inflación ni mucho menos la hiperinflación; no son las que fijan las reglas financieras y cambiarias que colocan la tasa de interés en niveles inaccesibles para los productores y que han llevado a las economías regionales al estado calamitoso en que muchas de ellas hoy se encuentran.

Por eso, creo que es importante y trascendente —y ayer lo aprobamos—, dar el apoyo que corresponde a la pequeña y mediana empresa, a los sectores agropecuarios, a los sectores de la producción que hoy están padeciendo una rece-

sión y una falta de crecimiento que se hace notar en todo el territorio nacional.

El federalismo parece ser una institución hueca y vacía que permanece en nuestra Constitución como un recuerdo de lo que fue en nuestra organización nacional.

Señor presidente: no se trata ya de una modificación en el orden del artículo 75, como dije:

Para ser más breve en estas apreciaciones que estoy realizando, no me voy a referir al denominado —a partir de este proyecto— impuesto a los bienes personales. Ha cambiado su naturaleza económica y solamente han transcurrido unas pocas horas desde su ingreso en esta Honorable Cámara, por lo que, si de su estudio posterior surge como conveniente, propiciaré las reformas que estime necesarias.

Señor presidente: esta crisis no es el simple efecto del rebote mexicano; es el resultado de una política económica que ha cometido errores y que necesita correcciones a plazo determinado.

Estas medidas —a mi criterio— sirven —y ojalá me equivoque— para pasar esta situación, pero no la superan sino que simplemente la postergan, poniendo a cargo de las provincias el mayor de los costos que supone afrontarla.

El gobierno sigue ciegamente por un solo camino y no acepta ningún tipo de aportes o soluciones que se le ofrecen desde otros sectores de la política. Creo que más allá de satisfacer una exigencia del Fondo Monetario Internacional, si bien necesaria pero no suficiente, el Congreso de la Nación —a mi criterio— debe abocarse al estudio de soluciones perdurables y no a simples paliativos de las crisis; más cuando sus consecuencias se descargan sobre el interior de la República, el que, como dijera muchas veces, parece no existir para el gobierno central, pero que mal se puede no tener presente en este recinto.

Termino, señor presidente, diciendo que no puedo aceptar la permanente postergación que sufren nuestros estados provinciales, y estimando que la normativa del artículo 3º viola las disposiciones de la Constitución Nacional, voto negativamente este proyecto, tanto en general como en particular.

Sr. Presidente (Lafferrère). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca del bloque PAIS.

Sr. Fadel. — Señor presidente: si bien voy a realizar algunas apreciaciones acerca de este proyecto, antes quiero recordar algunas afirmaciones que realizamos en oportunidad del trata-

miento del presupuesto nacional para 1995 y que fundamentaron nuestro voto negativo a la iniciativa considerada en aquel momento.

Se trata de afirmaciones que, por ahí, permitieron que alguien nos caracterizara de irresponsables porque estábamos dejando al país sin esa herramienta fundamental que es el presupuesto nacional.

En aquella ocasión nosotros decíamos que estábamos muy lejos de tratar un presupuesto. Sosteníamos que, en el mejor de los casos, estábamos considerando el tamaño de lo que debería ser un presupuesto y que, de ninguna manera, estábamos tratando la asignación de esos recursos. Porque los cinco tomos que tenía como anexo aquel presupuesto eran simplemente de mero carácter informativo y no formaban parte de él. Por eso, pedíamos que se incorporasen como parte del presupuesto a efectos de que en definitiva empezara a cumplir con las condiciones básicas de una norma de ese tipo.

También decíamos que, a nuestro entender, ni siquiera estábamos votando el tamaño del presupuesto porque él tenía una sobrevaluación en sus ingresos.

Hoy, este proyecto que estamos tratando está ratificando aquella afirmación y nos alerta acerca de que en la actualidad el país no cuenta con un presupuesto nacional. Por eso, consideramos que la realidad nos está exigiendo re debatir aquello que pretendía ser un presupuesto, la herramienta fundamental para la administración del país, y frente a la cual hoy nos encontramos con que no lo tenemos, con que no existe un tamaño cierto del gasto.

Por decreto, el Poder Ejecutivo tuvo que reducir gastos que en aquella oportunidad sosteníamos que podían reducirse. Hace unos instantes, el señor senador Bordón, del bloque PAIS, volvió a detallar una cantidad de gastos que pueden reducirse a fin de no continuar con esta suerte de parches que no hacen otra cosa que conducirnos, día a día, a aplicar recetas que nada tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra Argentina, y que son de neto carácter recesivo.

Decíamos en aquel debate que, desde el punto de vista presupuestario, el proyecto de presupuesto no cumplía con los principios básicos; que no estaban perfectamente determinados el gasto y el endeudamiento; que no cumplía con el principio de especificación de las partidas; que lo transformaba en una mera autorización del gasto con absoluta discrecionalidad; y que no cumplía con el sustancial principio de

todo presupuesto del Estado, que es el equilibrio.

Desde lo macroeconómico, también realizábamos algunas apreciaciones, que hoy se confirman con este proyecto. Decíamos, en su momento, que la composición relativa de los tributos, es decir la política fiscal que se estaba aplicando, era recesiva con relación al resto de los países del Primer Mundo, a los cuales decimos parecemos o estar acercándonos. Y esto lo afirmábamos a partir de la comparación con países vecinos, como Chile, ya que la participación relativa del impuesto a las ganancias dentro de la composición total de los tributos estaba en la República Argentina por debajo del 50 por ciento.

Hoy señalamos que con este proyecto se reafirma aquella posición, porque vemos que se incrementa un impuesto recesivo como el IVA. Por lo tanto, en términos relativos, reducimos aún más aquella participación de impuestos no recesivos como el impuesto a las ganancias.

Pero conformes con ello, y en el mismo sentido, ahora también quieren gravar los bienes personales productivos, que antes no estaban alcanzados por el impuesto.

Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando al productor: que compre un tractor o que deposite su dinero en un banco de Suiza?

Creo que realmente día a día se van confirmando todas aquellas dudas que, en un principio, planteábamos con relación al presupuesto que se votó el 23 de diciembre.

Hoy quiero plantear otra duda, que espero no se confirme. En su oportunidad ya la habíamos señalado y estaba relacionada con el tratamiento como gasto, que no correspondía, que se daba en el presupuesto a las obligaciones del Tesoro nacional. Nuestra duda residía en saber si ese tratamiento como gasto de las obligaciones del Tesoro nacional era a efectos de echarles mano en caso de no contarse con los recursos suficientes para atender las necesidades del Estado.

Hoy seguimos con esa duda. Y no olvidemos que dentro de las obligaciones del Tesoro nacional encontramos los fondos provinciales, como por ejemplo el vial, y también las coparticipaciones que les corresponden a Tierra del Fuego y a la Capital Federal.

Esperemos que esta duda, señor presidente, no se confirme, que esos fondos, considerados como obligaciones del Tesoro nacional, no se toquen y que, a partir de ahora, empecemos a debatir todas y cada una de las leyes dentro del marco macroeconómico que corresponde; no

como lo estamos haciendo hoy, es decir, como parches coyunturales diarios que se nos exigen desde afuera y que nada tienen que ver con lo que nos está ocurriendo en el país.

Ayer estábamos tratando un proyecto de ley cuyo título era algo así como "Promoción para las pequeñas y medianas empresas". Nosotros votamos en contra, porque dijimos que a nuestro entender ese proyecto de ley tenía que ver más con la flexibilización laboral que con lo que decía su título, en lo referente a la promoción de las pequeñas y medianas empresas, porque era una mera autorización al Poder Ejecutivo nacional a efectos de que, a través de la norma pertinente, reglamentara medidas que paliaran la grave situación por la que atraviesan esas empresas.

Hoy vemos que el mismo Poder Ejecutivo, a través de otro proyecto, va a gravar los bienes personales productivos que tienen las pequeñas y medianas empresas. Entonces, señor presidente, la ley que se ha votado ayer no es otra cosa que una autorización más de las que el Ejecutivo está acostumbrado a sacar a este Congreso; no es otra cosa más que parte del acoso institucional que permanentemente hace el Poder Ejecutivo sobre este Congreso para extirparle facultades que le son inherentes, nacidas de la propia Constitución Nacional.

Sr. Presidente (Lafferrière). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital del bloque radical.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: en momentos de dificultad y de crisis es importante el funcionamiento de las instituciones. A la velocidad de los acontecimientos debe corresponder una capacidad de respuesta rápida de las instituciones. Por eso llegué a decir que el Congreso debía estar en sesión permanente.

Es importante que los factores de la crisis sean debatidos y asumidos. Por eso estamos aquí dando este debate frente a un proyecto de ley que trata de superar la emergencia con nuevas medidas fiscales, pero que tiene otras cosas que de paso se agregan porque siempre el gobierno aprovecha la emergencia para introducir aspectos que están fuera de la cuestión.

La situación actual no es impensada ni fue imprevisible. Ya cuando el ministro de Economía anunció el retiro del Fondo Monetario Internacional, dejó la impresión de que era para que no le miraran las cuentas. Pero el debate económico se ha venido dando en el país de una manera muy particular. Frente a la soberbia y a la unilateralidad del gobierno estaban las advertencias y las críticas que salían desde la oposición. Pero

nada de esto era escuchado. Incluso se menospreciaban los aportes.

Cuando se discutió el presupuesto para el año 1995, advertimos que era transitorio y que no se basaba sobre cálculos reales. Cuando por varios años los saldos negativos de la balanza comercial externa ponían una luz de alerta, el gobierno respondía que eso era bueno, porque significaba que la actividad económica incorporaba bienes de capital al proceso productivo. Hoy nadie discute que éste es un elemento muy peligroso de la situación económica.

Advertimos también que había que evitar una situación excesivamente dependiente del ingreso de capitales transitorios, porque en las economías se dan tiempos cíclicos y otros, anticíclicos; unos en los que vienen capitales y otros en que se van.

Y cuando por la incertidumbre generada se retiraron muchos de esos capitales, apareció la grave situación financiera que ahora se afronta a través de este proyecto de ley.

Se vendieron las empresas públicas sin reglas claras que impidieran, como está pasando, la salida de sus fondos, los que están compuestos por lo que pagan los usuarios por los servicios públicos que reciben.

Se creó el fondo especial para la provincia de Buenos Aires que hoy ronda los 700 millones de pesos anuales, manejados sin control y utilizados como herramienta electoral por el gobierno de la provincia y, desde luego, para la asistencia por motivos electorales, de provincias con gobiernos afines al gobierno nacional.

Por eso esta situación no era imprevista y ahora, ¿quién va a pagar los "platos rotos"?

Este proyecto de ley aumenta los impuestos al consumo y tiende a incluir en el gravamen a los pequeños productores, afectando, aún más de lo que están, las economías regionales.

Valoramos la estabilidad monetaria pero falta llegar a la estabilidad estructural, que se dará cuando se dinamice el proceso económico.

Queremos preservar la estabilidad, queremos que el Congreso funcione y aquí estamos. No venimos a poner palos en la rueda sino a discutir y a reclamar que se considere a la oposición como parte que es el gobierno de la República.

Pero afrontamos este proyecto sin la información suficiente. La desinformación en que se nos tiene, las imputaciones permanentes, los ataques descomedidos, conforman un estilo de soberbia que lleva a la división. Si hay crisis, es por la oposición; si se arregla, es pese a la oposición.

Nosotros venimos a plantear lealmente la cuestión porque por sobre todo nos importa el país, nos importa la gente y por eso venimos al debate responsable.

Pero ¿cómo puede hacerse responsablemente el debate si sólo tenemos la exposición del señor miembro informante que se limita a resumir el articulado de la iniciativa pero se elude y se soslaya la magnitud de la crisis, la realidad de la emergencia, las razones de urgencia para que ésta sea la medida que se tome, los cálculos sobre la recaudación estimada, el impacto del aumento impositivo sobre la población, sobre las condiciones de trabajo, sobre la situación social, sobre las economías de las provincias?

Otra vez aparece el estilo de la imposición. Ni siquiera la carta de intención que nuestro gobierno firmará con el Fondo Monetario Internacional es conocida; la ignoramos totalmente. Recién se conocerá el 15 de abril, según se afirma.

Y como decía: aprovechando la crisis, se agrega el artículo 4º, donde hay un compromiso de aportar 1.200 millones de pesos a las provincias pero condicionados a la reforma que se impondrá desde el poder central, y se incorpora —como si fuera una casualidad— al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba fuera de la cuestión. Es decir, se quiere avanzar sobre algo que pertenece al patrimonio de la ciudad, que en su momento va a ser autónoma, para hacerlo seguramente antes de que su autonomía sea alcanzada.

¿Por qué esto de incluir el Banco de la Ciudad de Buenos Aires? Estamos sin información, sin argumentos, sin explicación.

Señor presidente: yo vengo a protestar contra esto, porque es el estilo que se viene imponiendo desde el gobierno.

Ya con motivo de la emergencia impulsó y logró la aprobación de una ley llamada de solidaridad previsional, que no es para la emergencia sino que es permanente y que apunta al corazón del sistema público de reparto para liquidarlo definitivamente.

Ante esto tenemos el deber de decir al gobierno que es necesario afrontar la emergencia y estamos para el trabajo responsable y para buscar las soluciones que la situación requiere, aun cuando las causas estén en errores cometidos y señalables.

Pero es importante ese gesto político al que hace unos días hacía referencia el señor senador por Entre Ríos Lafferrière, cuando discutíamos el proyecto de ley de solidaridad previsional. Se trata de un gesto político que considere a todos

como parte del país, que escuche y valore el conjunto de las opiniones y que no menosprecie las que son de advertencia o crítica, que también tienen sentido constructivo porque el país es de todos. Y el régimen republicano impone actuar con la humildad que haga posible el diálogo, y la coincidencia cuando se trata de superar dificultades graves como las que afronta el país en estos momentos.

Le decimos esto al gobierno nacional porque busca resolver sus problemas, solamente los suyos, agravando los de las provincias; porque trata de arreglar sus cuentas sin pensar en la gente que sufrirá las consecuencias de esta situación y de las decisiones que se tomen. Es la gente la que soportará el aumento impositivo, y no hay dudas de que el momento que vivimos es causado por el exceso del gasto, la falta de previsión y ese estilo de unilateralidad y soberbia que es necesario abandonar.

Todos queremos preservar la estabilidad, la disciplina fiscal y las reglas de una economía sana, pero también queremos apuntalar y fortalecer las instituciones y la competitividad del país a fin de que se inicie un proceso de desarrollo dinámico que tienda al mejoramiento de los pronósticos sobre el crecimiento económico.

Porque se abren perspectivas favorables para el país y porque la crisis es superable es que no queremos ser agoreros y es que venimos a pedir que se deje de lado el electoralismo, el descomedimiento y el ataque. Pedimos que el gobierno abandone ese estilo de aislarse para que empiece a comprender que cuando la gente sufre las consecuencias de errores cometidos es necesario actuar con humildad republicana a fin de superar la crisis.

Adhiero a todo lo expuesto por el presidente de nuestro bloque sobre este proyecto de ley que estamos discutiendo. Advertimos lo que significa la delegación de facultades, el aumento del impuesto al consumo y la extensión de la base imponible, que comprende a los pequeños productores, que sufrirán las consecuencias, y que afectará todavía más a las economías regionales, mientras se disminuye el impuesto que recae sobre los titulares de grandes propiedades. Y advertimos sobre ese artículo 4º que, en ocasión de la emergencia, se convierte en un instrumento para el centralismo y la imposición como un estilo de gobierno que debería superarse.

Por eso, señor presidente, solicito que el gobierno sepa escuchar la advertencia, que se hace con sentido constructivo. De nuestra parte, estamos aquí para cumplir con nuestro deber

porque entendemos que las instituciones, el Congreso, deben participar. Pero también es cierto que para que haya una efectiva participación debe brindarse la información plena y no repetirse la experiencia de este proyecto, que pareciera impuesto por la mayoría, sin la explicación de los fundamentos y razones necesarias como para que la oposición pueda definir los criterios fundantes de sus actitudes.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador José A. Romero Feris.

Sr. Presidente (Romero Feris). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Señor presidente: está por terminar este debate y siento, con un poco de tristeza, que se está cumpliendo lo que nuestro bloque anunciaba en este recinto hace algunas sesiones al comenzar la consideración de esta cadena de proyecto de ley de emergencia.

Mi impresión es que esta crisis económica por la que atraviesa la Argentina es en realidad, la culminación de imprevisiones que hubiéramos podido rectificar a tiempo, quizás meses o años antes, si se hubiera prestado atención a lo que decía la oposición, y hasta el oficialismo. Pero lo que sosteníamos no mereció la atención de la conducción económica y hasta diría que fue tomado con desprecio por ella. Es así, entonces, como llegamos a una situación realmente crítica como la que atraviesan las finanzas y la economía del país.

Sintéticamente, señor presidente: esta crisis está asentada en un proceso que no tiene secretos, pues se ha reiterado muchas veces en la economía argentina.

Una vez instaurados el plan de estabilización y la ley de convertibilidad, que de manera más expresa o más tácita todos los argentinos apoyamos, como siempre se apoyan los planes de estabilización en el país, se comenzó a producir en la economía, paralelamente a la renuncia a nuestra soberanía monetaria, un cambio en el sistema de precios relativos internos y externos.

En otras épocas esto se modificaba a través de la variación del tipo de cambio, pero al haber atado nosotros nuestra moneda a un tipo de cambio externo, no se pudo utilizar más esta herramienta con la que tradicionalmente se nivelaba esta clase de desequilibrios, y este proceso de deterioro de nuestros precios internos con respecto a los precios externos de la economía mundial fue generando un déficit comercial creciente que causó preocupación en muchos sec-

tores de la política y de la economía nacional y en muchos sectores de la industria y del comercio.

Pero estas voces de alerta eran contestadas de manera inexorable por la conducción económica sosteniéndose que ese déficit comercial estaba siendo financiado a través del ingreso de capitales y, por otra parte, estaba generado por la importación de bienes de capital que iban a sembrar la base de un crecimiento productivo en el país. Ese déficit —sostenían— se iba a revertir cuando esos capitales, una vez que hayan modernizado la economía nacional, estuvieran exportando a pleno e incidiendo, por lo tanto, de manera positiva en el sector externo nacional.

Pero lo cierto, señor presidente, es que este ingreso de capitales tenía objetivos diferentes a las importaciones. El que importaba terminaba su relación económica al pagar el bien de consumo o de capital que traía al país, pero los ingresos de capitales con los cuales se financiaban estas importaciones seguían siendo de los titulares de esos capitales, que comenzaban a trabajar en la economía argentina, fundamentalmente con dos destinos: un gran caudal de estos capitales ingresados fue a comprar empresas públicas; y la otra parte de ellos fue a generar negocios financieros en pesos, en ambos casos devengando un crecimiento en pesos que desbalanceaba esa regla de oro de la convertibilidad que sostiene que el circulante debe ser la contracara de las reservas.

Las empresas públicas privatizadas fueron generando ganancias y, por supuesto, los capitales financieros, trabajando en nuestro sistema financiero y bancario, fueron devengando intereses y ganancias. De esta manera se fue generando un desfase que, producida la pérdida de confianza en ese equilibrio que debe existir entre la oferta monetaria y la reserva en divisas, fue una bomba de tiempo para la economía nacional.

Así, en el mes de diciembre del año pasado, la relación entre la oferta monetaria y las reservas era del 45 por ciento. Esto quiere decir que la oferta monetaria superaba en el doble a las reservas internacionales. En consecuencia, la conducción económica trató de neutralizar los efectos de este fenómeno manteniendo altos los encajes bancarios. Pero esta decisión tuvo como efecto en la economía nacional un altísimo grado de iliquidez, que hoy es el signo de la crisis en toda la geografía argentina. No hay recursos en pesos para hacer funcionar la economía nacional.

Este problema también comienza a trasladarse, en sus efectos, a los sectores productivos,

a punto de llegar hoy a preguntarnos, señor presidente, si los cálculos del producto bruto interno para el corriente año se podrán mantener, no ya en el nivel de crecimiento que se preveía alegremente en diciembre, sino al menos en los mismos niveles del año pasado.

¿Por qué digo esto? Porque como hombres de la política sabemos cómo están nuestros distritos y conocemos las situaciones económicas de los distintos sectores de nuestras provincias.

¿Qué puede aumentar del producto bruto interno? ¿Puede aumentar el aporte del sector servicios, o del Estado, con todas estas restricciones en el gasto? Evidentemente, no. ¿Puede aumentar el aporte al producto bruto interno del producto bruto industrial, cuando ya hay sectores dinámicos de la economía —como el automotriz— que han anunciado la paralización de su línea de fabricación? Evidentemente, no. ¿Puede incrementar su aporte al producto bruto interno el sector agropecuario, que está como todos sabemos en la geografía argentina? Indudablemente, no. ¿Alguien puede decir que es el sector comercio el que ha aportado un crecimiento extraordinario al producto bruto interno? Conocemos la caída de las ventas y la retracción que existe en el comercio nacional.

Entonces, el peligro al que hoy estamos sometidos o, en todo caso, el riesgo al que se asoma la economía argentina, no es, por supuesto, el estallido ni tampoco la hiperinflación, sino una situación recesiva que, por otra parte, es muy difícil de enfrentar con las medidas tradicionales de política económica, y que exige —como lo han dicho los senadores de todas las bancadas que han participado en este debate— un gran acuerdo político argentino que defina el modelo de país que queremos construir.

No le estamos imputando a la conducción económica el haber descuidado esa lucha por la nivelación de las cuentas públicas sino que lo que en todo caso le estamos imputando es el haber descuidado la necesaria lucha por fomentar la transformación económica de nuestro país, de nuestro campo, de nuestras pequeñas industrias, de todo los sectores que son generadores de empleo y que en este mundo que se asoma deben tener un fundamento en el crecimiento de la capacitación y la educación.

Creo que la mayor tensión, que estoy seguro palpita en el corazón de todos los dirigentes políticos argentinos, es la que se da entre lo que podríamos ser y lo que estamos siendo. Porque éste es un país que tiene —como en la sesión de ayer decía el señor senador por Río Negro— po-

tencialidades inmensas para entrar al siglo XXI pisando fuerte, marcando rumbos, liderando la integración y el crecimiento. Esta Argentina nuestra estaría en condiciones de marcar rumbos.

Pero también digo que si no cuidamos la necesidad de decisiones políticas de conjunto y de consenso, si seguimos en esta actitud de hacernos cargo de los problemas de manera sectorial, ignorando las voces de los demás, si seguimos adoptando actitudes que a veces se confunden con la soberbia, el futuro de este país puede no ser aquel por el cual todos estamos con ganas y necesidades de luchar.

Algunos pueden decir que estas medidas están dando resultado. Pueden decir que apenas anunciadas, que apenas expresadas las leyes que conforman este paquete y las cifras con las que cuenta el ministro de Economía cambió el humor de los mercados. Algunos pueden decir: "Ya es un éxito antes de empezar". Subió la Bolsa; en un par de días hubo una recuperación de más del 15 por ciento; hay una tranquilidad general. Y yo digo que sí, que hasta hubo euforia, como decían los diarios de anteayer. Pero es una euforia que tiene que ser analizada por nosotros con algo de sospecha; como dice algún refrán, "repuesto el queso, los ratones juegan".

Hay 11 mil millones de dólares más para seguir haciendo negocios, diferencias, operaciones, tomando ganancias fáciles. ¿Y de dónde ha salido este "queso"? De las leyes que hemos aprobado: de la retracción del sistema jubilatorio estatal, de la reducción del gasto público, de la ampliación de los impuestos, que ahora paga toda la gente, de la reposición de este capital, que va a seguir "bancando" los juegos financieros; al no encontrar frente a sí la solidaridad de un sector político que le haya acotado los rumbos corremos el riesgo —como se decía hace algunos instantes en este mismo debate— de tener que enfrentarnos dentro de dos o tres meses a la necesidad de un nuevo ajuste cuando se hayan licuado todos esos capitales que hoy estamos juntando reduciendo los ingresos populares, liquidando capital público y aumentando el nivel de endeudamiento del país.

Por eso, señor presidente, es que...

—Varios señores senadores dialogan entre sí.

Sr. Genoud. — Señor presidente: solicito que se respete al orador que está haciendo uso de la palabra.

Sr. Presidente (Romero Feris). — La Presidencia ruega a los señores senadores se sirvan respetar al orador.

Sr. Genoud. — Señor presidente: el bloque justicialista está dedicado a buscar los veinticinco votos que hacen falta para aprobar este proyecto de ley. Pero que lo haga en silencio.

Sr. Presidente (Romero Feris). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Agradezco al señor presidente de mi bancada el intento por defender el derecho a hacer uso de la palabra. Pero estoy seguro de que estos murmullos que se oyen de ninguna manera significan una falta de respeto a quien habla. Como conozco la actitud política de los señores senadores, no lo tomo de esa forma.

Señor presidente: para finalizar con esta alocución —que de ninguna manera intenta conspirar contra la armonía, ser agresiva, o romper la articulación que en el disenso debe llevar a la formación de una opinión política en el Parlamento argentino— en este momento quiero expresar mi coincidencia con las palabras del señor senador por la Capital.

El país, señor presidente, no es de quien lo gobierna; el país es de todos. El país no es del oficialismo, y tampoco es de la oposición. Cada uno de nosotros aporta un pedazo de verdad a la verdad grande de esta Nación.

En esta reconstrucción democrática, que todavía no ha terminado, venimos cumpliendo roles a los que estamos atados por la propia dinámica de la política argentina. Comprendo que los hombres de la mayoría deban respaldar a su gobierno; a veces, quizás hasta sin coincidir con las últimas filigranas de las medidas que se toman. También nos pasó a nosotros cuando nos tocó gobernar.

Nuestra misión hoy es no obstaculizar de ninguna manera la tarea de la mayoría. La mayoría no sólo tiene el derecho sino el deber de gobernar. Pero nosotros también tenemos el derecho de expresar con total y absoluta claridad nuestro pensamiento para aportar a la inteligencia del momento difícil, del momento traumático, del momento grave que está viviendo nuestro país.

Por eso es que la expresión de nuestro disenso de ninguna manera conlleva el deseo de que fracasen las medidas que el oficialismo expone. Simplemente, mostramos nuestras preven- ciones; exhibimos nuestras dudas; alertamos

sobre los resultados de medidas que, creemos, deben ser rectificadas.

Estoy seguro de que con estas medidas algunos meses "tiramos"; pero recuerdo que son medidas que tienen como contracara la retracción de los ingresos populares, la liquidación del capital público y el endeudamiento del país. La Nación en su conjunto va a soportar las tres cosas.

Quizás éste no sea el momento —quizá lo sea después del 15 de mayo, cuando ya esté definido el escenario de la nueva etapa argentina— para encontrar un perfil de crecimiento más integrado, más justo, más equitativo, que llegue a todas las regiones del país, que respete y defienda el federalismo, que encuentre los caminos de integración para la enorme cantidad de compatriotas que hoy están soportando el peso de este ajuste, todavía confiando, todavía con esperanza, y a quienes no podemos defraudar.

Por estas razones, señor presidente, nuestro bloque participa de este debate con la madurez de quien debe estar, desde su pedazo de trinchera, aportando a la construcción del país, y adelanta —como ya lo hizo el presidente de nuestro bloque— su voto negativo para este proyecto de ley.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Romero. — Señor presidente: es conocido en otros ámbitos parlamentarios —y obviamente así debe ser— que resulta muy difícil que los representantes de la oposición voten favorablemente impuestos propuestos por el oficialismo; menos aún en época electoral. Comprendemos esta posición. Tal vez, aun con la crítica, no dejan de hacer una contribución al debate que estamos realizando con respecto a la situación actual y a los proyectos de ley que estamos considerando.

Al respecto, debo decir que nosotros creemos que al extenderse la base mejora el grado de equidad, ya que al extenderse la base y al evitarse las excepciones también mejora el control sobre el impuesto a las ganancias, porque una de las formas de exteriorización de las ganancias es el incremento del patrimonio, que a veces está encubierto u oculto en las excepciones u exenciones que existen en la ley.

Por eso, haber bajado la alícuota también es una contribución importante porque abarata el

costo de este impuesto, que se calcula sobre el neto entre lo que se tiene y lo que se debe.

De ninguna manera al eliminarse exenciones o excepciones se va a perjudicar a los pequeños empresarios, ya que ellos tienen una protección —como el mínimo no imponible— de 102.300 pesos, sobre lo cual no se aplica este gravamen.

Pero también tenemos que recordar otro elemento de esta iniciativa, del cual parece que nos olvidamos. Los 700 millones que se pretenden recaudar tienen por objeto cubrir el objetivo de esta ley 23.966, que es el financiamiento del régimen nacional de previsión social.

Se habla mucho en los medios sobre el problema de los jubilados, y con esta medida les estamos dando una respuesta concreta a través de este compromiso que asume el justicialismo en época electoral de hacer recaer el peso del impuesto sobre los que más pueden pagar, a los efectos de contribuir al sostenimiento de los fondos del régimen nacional de previsión social.

Entonces, es de esperar que no suceda aquí lo que pasó en la Cámara de Diputados ayer, en la cual algunos bloques de la oposición, a pesar de reclamar a favor de los jubilados, no acompañaron esta iniciativa y se retiraron del recinto cuando se estaban por votar estos fondos para los jubilados.

Podemos discutir si la medida es progresiva o regresiva; es un debate que debe darse y que no se agota en este momento. Pero también debemos decir que nos toca hoy a nosotros, los justicialistas, dar una respuesta concreta, aun con medidas que parecen no electoralistas, porque no nos están preocupando las elecciones sino la solución de los problemas.

Debo decir también que cuando hablamos del IVA estamos convencidos de que ese dinero va a volver a las provincias, no para privatizar, ya que la ley no dice eso, sino para ayudar y financiar la reforma de los estados provinciales, lo cual no es una imposición sino una necesidad.

Muchas provincias la encararon con éxito, y otras todavía no la pueden instrumentar, no por falta de voluntad sino por carecer de financiamiento. Pero si hablamos de federalismo, éste tiene que poder sustentarse. Hay bancos que están siendo asistidos, como el de Córdoba, con 180 millones.

Por eso, no es importante saber si los cordobeses quieren o no que el banco sea provincial, pues no lo pueden sustentar o sostener por las propias realidades financieras y del mercado. Otro caso es el Banco de Mendoza, que en estos días tuvo que recibir 210 millones de apoyo.

Si no creamos esos fondos, ¿cómo se los va a apoyar? Aquí se ha hablado de un "efecto champagne" que no sé lo que significa, pero sí sé que el Banco de Mendoza padece de un "efecto vino", ya que se han otorgado créditos ajustados a ese producto que luego los productores no pudieron pagar, lo cual le produjo a ese banco grandes quebrantos.

Entonces, señor presidente, estamos convencidos de que por el destino de estos fondos y por las necesidades del momento es conveniente aprobar esta iniciativa. Reconozco que el disenso de la oposición en el debate, e incluso cuando vota en contra, es una contribución. No ocurre lo mismo con aquellos que abandonan el recinto, como sucedió lamentablemente ayer en Diputados con un grupo de legisladores.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: creo que el miembro informante ha sido excesivamente simplista cuando ha querido calificar la actitud del bloque radical, que se opone a la sanción de este proyecto, considerándola una medida meramente electoralista porque siempre es antipático votar leyes que imponen nuevas gabelas o impuestos a la ciudadanía.

Si nuestros discursos hubiesen estado despojados de argumentos técnicos, de cifras y de razonamientos, yo se lo admitiría. Pero creo que hemos sido claros a la hora de exponer nuestra oposición para demostrarle a la opinión pública que nuestro voto es consciente y responsablemente fundado.

No es equitativo el nuevo impuesto a los bienes personales. Era más equitativo cuando recaía sobre los bienes personales mientras no estuviesen destinados a la producción.

Yo dije que hubiese sido preferible que se aumentara la alícuota del impuesto para que pagaran los que más tienen, y no haber aumentado la base imponible. Al aumentar la base imponible se incorporan como contribuyentes, en este impuesto, miles y miles de pequeños y medianos productores agropecuarios, fundamentalmente del interior del país.

Y no vale como defensa lo que dice el miembro informante sobre el mínimo no imponible de 100 mil pesos; porque ahora, para computar el mínimo no imponible, señor presidente, se van a computar la casa, el automóvil, la finca o la propiedad agropecuaria, el tractor, la maquinaria agrícola, siempre y cuando no estén prendadas o se trate de un bien hipotecado.

¿Quién no va a superar los 100 mil pesos si es que se incorpora la totalidad de los bienes del patrimonio para pagar este impuesto? Es francamente inequitativo y, además, recesivo, señor presidente.

Acá, en este recinto, hay responsables del área de Economía. Que se tome nota, porque todavía estamos a tiempo de revertir esta sanción equivocada, o, al menos, de modificarla con otro proyecto de ley.

Esto es recesivo, señor presidente, porque el productor que estaba por debajo de los 100 mil pesos del mínimo no imponible no va a comprar un tractor de 50 mil pesos ni de 30 mil pesos porque eso va a hacerlo caer inexorablemente dentro del impuesto a los bienes personales; porque, en este caso, no hay distingo entre bienes personales destinados a la producción y aquellos que no tienen este destino, señor presidente.

Y reitero totalmente lo que dije respecto del IVA. Este incremento del IVA en tres puntos viene a agravar y a profundizar toda una concepción absolutamente regresiva de los impuestos. El IVA lo pagan todos. Fundamentalmente, se ataca visceralmente al que tiene pocos recursos, al que tiene bajos sueldos y salarios, y debe pagar el 21 por ciento de IVA en el precio del micro, del subterráneo, del pan, de la leche, de los medicamentos, de las "bayaspirinas", etcétera.

Y, además, señor presidente, creemos que es francamente injusto lo que se hace con las provincias, que están —es cierto— sufriendo grandes padecimientos, como los sufren las economías regionales del país, a lo que se agrega el "efecto tequila", que ha golpeado a todos los bancos, privados y oficiales, de la Argentina, prácticamente sin distinción. Y ahora, que tenían la posibilidad de encontrarse con recursos, les dicen: "No; lo que recaudemos en concepto del aumento de la alícuota del IVA, va a ser manejado discrecionalmente por el Tesoro de la Nación", desconociendo un principio que está consagrado en el artículo 75 de nuestra Ley Suprema, de nuestra Constitución Nacional.

Más grave aún es, señor presidente; el hecho de que se dispone que esos 1.200 millones de pesos, o sea lo que sería la masa coparticipable como coparticipación secundaria, van a quedar al arbitrio de lo que diga el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos —o el área de Economía— en materia de aportes a las pro-

vincias que hagan bien los deberes. Di el ejemplo de Córdoba y doy el ejemplo de todas las provincias argentinas.

En Mendoza se privatizaron muchas empresas. Hubo una privatización que fue especialmente polémica. No se trató propiamente de una privatización; fue la transferencia —o no— de las cajas de jubilaciones de la provincia a la Nación. Se hicieron encuestas públicas; se consultó a los partidos políticos y el gobierno provincial, por último, resolvió —pese a que el pedido del gobierno nacional era el de la transferencia— que se mantuviesen en el ámbito de la administración pública provincial. Y así se hizo.

Pero ahora, quizá, dentro de los deberes que tiene que hacer Mendoza para cobrar los 45 millones que corresponden a ese artículo 4º del proyecto de ley que hoy seguramente se va a aprobar, también se le va a exigir la transferencia de las cajas de jubilaciones.

Entonces, creo que no corresponde someter tan indignamente a las provincias —como nunca lo han estado— al poder central, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Bordón. — Señor presidente: simplemente, para no reabrir el debate que ya hemos dado, quiero ratificar el porqué de nuestro voto negativo.

Trajimos hoy, como lo hicimos el 22 y el 23 de diciembre pasado, una visión integral de la realidad, un análisis de cómo creemos que van a evolucionar las cosas y cuáles constituyen la mejor alternativa y solución. Trajimos la idea de no encerrarnos exclusivamente en un tema de un impuesto, sino una visión fiscal presupuestaria integral. También trajimos otras ideas en borrador, sobre las que nos hubiera gustado trabajar más concretamente, acerca de cómo bajando gastos podíamos evitar este tipo de impuestos que son, a nuestro entender, regresivos, no en todos sus aspectos pero sí en varios de ellos.

El señor miembro informante del bloque de la mayoría, al fundamentar su voto, nos respondió como si de esto no hubiésemos hablado. Habló de elementos electoralistas, y yo creo que en ninguno de los discursos hubo elementos de ese tipo. Cuando se quiere confundir a la población, sí hay elementos electoralistas como, por ejemplo —quizás, por una mala información—, creer que hoy el Banco de Mendoza tiene créditos a valor producto. Y este gobierno actual no

da crédito a valor producto. Esos créditos los otorgó el gobierno anterior que yo presidía, en medio de la crisis hiperinflacionaria, lo que evitó políticas inflacionarias y permitió un altísimo grado de cobrabilidad, justamente, porque comprometía al productor con su propia realidad, no con la realidad de los juegos y maniobras financieras.

Por supuesto, un tema que los mendocinos estamos analizando es cómo resolver el problema actual del Banco de Mendoza, y lo haremos sin demagogia, sin eludir la responsabilidad que a cada uno le haya tocado en la historia y sin dejar de tener un sentido constructivo.

Considero que estamos hablando en serio de plantear las cosas de una manera constructiva en el debate, creo que se ha ingresado en el debate político pero, bueno, éste es el Senado de la Nación y tampoco le escapamos a ese debate.

Simplemente, reitero que nuestra postura ha sido una visión integral, una visión de gastos y de recursos, una visión de estabilidad monetaria pero también productiva y social. El 23 de diciembre del año pasado también tuvimos que escuchar por parte del miembro informante de la mayoría que estábamos equivocados cuando decíamos que la hipótesis del presupuesto para 1995 era incompatible con la estabilidad y con la realidad. Nos contestaron de la misma manera que hoy. Lamentablemente; ojalá nos hubiéramos equivocado. Tuvo que pasar poco tiempo para que quedara en claro que, lejos de estar poniendo palos en la rueda, estábamos aportando una visión crítica del presupuesto pero constructiva respecto de la gestión de gobierno.

En este marco, lamentándolo, y sentados en nuestras bancas —como estamos siempre—, vamos a votar negativamente el proyecto de ley en consideración.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — A los fines pertinentes, dejo constancia de que quien ejerce la Presidencia ha votado también por la afirmativa, lo que sumado a los veinticuatro votos afirmativos de los senadores que están en sus bancas hace un total de veinticinco votos afirmativos.

En consideración en particular.

— Se enuncia y aprueba el artículo 1º.

Sr. Presidente (Menem). — El artículo 1º ha sido aprobado con la misma mayoría.

— Se enuncian y aprueban los artículos 2º a 5º.

— El artículo 6º es de forma.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca. — Solicito que se deje constancia de que todos los artículos han sido sancionados con una mayoría de veinticinco votos de miembros de este cuerpo.

Sr. Presidente (Menem). — Se deja constancia de esa mayoría para cada uno de los artículos y en la votación en general.

Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

— Son las 20 y 4.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.